

TENDENCIAS REGIONALES Y GOBERNANZA EN CENTROAMÉRICA: TERRITORIOS Y ACTORES EN LA ENCRUCIJADA

OCTUBRE 2022

TENDENCIAS REGIONALES Y GOBERNANZA EN CENTROAMÉRICA: TERRITORIOS Y ACTORES EN LA ENCRUCIJADA



CENTROAMÉRICA, OCTUBRE 2022

305

F959t

Fundación Prisma

Tendencias regionales y gobernanza en Centroamérica:
Territorios y actores en la encrucijada / Programa Regional
de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, PRISMA.
-- 1a edición -- San José, Costa Rica: Fundación PRISMA,
2023

55 páginas : ilustraciones ; 21 x 28 centímetros

ISBN 978-9930-9811-2-2

1. ECONOMÍA - AMÉRICA CENTRAL - ACTORES .
2. AMÉRICA CENTRAL - ECONOMÍA - TERRITORIOS.
I. Título

Diseño de portada

Diana Díaz

Diagramación

Leonor González



Esta publicación está liberada bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir Obras Derivadas Igual. Para mayor información:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CL

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| Introducción..... | 7 |
| Tendencias regionales: Territorios y actores en la encrucijada | 9 |
| Mayor interés por la explotación comercial de los recursos naturales de los territorios rurales en Centroamérica | 10 |
| Expansión de cultivos para la agroindustria y sistemas agroalimentarios | 11 |
| Aumento del extractivismo: Minería metálica e hidrocarburos..... | 12 |
| Infraestructura de transporte, energía y plataforma logística para el comercio, los servicios y el turismo | 13 |
| Desafíos del cambio climático y contradicciones para la adaptación y mitigación | 14 |
| Expansión del control territorial por parte de actores ilícitos..... | 15 |
| Estado de derecho, participación y ejercicio del poder | 16 |
| Actores territoriales, movimientos sociales y sociedad civil | 19 |
| Dinámicas y gobernanza en territorios de Centroamérica..... | 21 |
| Alta Verapaz, Guatemala | 21 |
| Principales dinámicas territoriales..... | 23 |
| Implicaciones para la gobernanza | 25 |
| Litoral atlántico y Muskitia hondureña..... | 25 |
| Principales dinámicas territoriales..... | 26 |
| Implicaciones para la gobernanza | 29 |
| Ahuachapán, El Salvador | 30 |
| Principales dinámicas territoriales..... | 31 |
| Implicaciones para la gobernanza | 32 |
| Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) | 33 |
| Principales dinámicas territoriales..... | 34 |
| Implicaciones para la gobernanza | 37 |
| Guanacaste, Costa Rica | 37 |
| Principales dinámicas territoriales..... | 38 |
| Implicaciones para la gobernanza | 41 |

| | |
|---|----|
| Región del Darién, Panamá..... | 42 |
| Principales dinámicas territoriales..... | 44 |
| Implicaciones para la gobernanza..... | 45 |
| Implicaciones para una agenda de apoyo estratégico de la sociedad civil a los actores territoriales..... | 47 |
| Bibliografía..... | 50 |

INTRODUCCIÓN

Centroamérica vive en la actualidad un contexto de múltiples crisis, muy lejos del optimismo que se vivió en la década de los noventa respecto a la protección de los derechos humanos y la expansión de oportunidades para la expresión y participación social y política. El actual contexto de violencia, corrupción, impunidad y erosión del Estado de Derecho no solo amenaza derechos civiles y políticos ganados en las décadas anteriores, también tensiona y golpea a las comunidades locales, pueblos originarios y afrodescendientes que se encuentran en “primera línea” defendiendo alternativas de convivencia que resultan fundamentales para mantener la esperanza en un futuro más democrático, inclusivo y sustentable.

Las organizaciones de sociedad civil, nacionales o internacionales, tienen la oportunidad de fortalecer sus luchas si son capaces de reconocer sinergias entre la defensa de valores como la democracia, el Estado de Derecho, o la transparencia, y la defensa de las comunidades locales y sus distintas formas de organización. En efecto, la gobernanza democrática, inclusiva y sustentable requiere actores territoriales fortalecidos en sus derechos políticos y civiles, socioeconómicos, culturales, territoriales y de autodeterminación.

Esto pasa por reconocer la existencia de numerosas experiencias de gobernanza local y territorial que logran alcanzar, simultáneamente, objetivos de seguridad alimentaria, diversificación de las economías locales, cohesión social y la protección y recuperación de recursos naturales y servicios ecosistémicos. Estos actores locales y territoriales tienen también un rol clave en la identidad y la vida institucional de los territorios, como parte integrante de la sociedad civil, junto a otras organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Actuando desde sus propios sistemas de gobernanza o en el marco de las oportunidades abiertas por la institucionalidad del Estado, hacen posible la construcción de resiliencia ante diversas situaciones de crisis como la pandemia, la erosión de la institucionalidad democrática, o los eventos climáticos extremos.

Sin embargo, una serie de tendencias ponen hoy en peligro dichas experiencias de gobernanza entre las cuales está el mayor interés por la explotación comercial de los recursos naturales, que se expresa en la agresiva expansión de cultivos de agroexportación, el aumento del extractivismo minero y de hidrocarburos, así como una continuada apuesta por posicionar a la región centroamericana como una plataforma logística y de servicios. Esto se da en un contexto de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, y la implementación de mecanismos de control territorial por parte de actores de la economía ilícita.

Adicionalmente, varios países de la región experimentan retrocesos en el Estado de Derecho, situación que amenaza las condiciones mínimas para la efectiva participación de la población local en la gobernanza de sus territorios y recursos. Derechos ganados en épocas anteriores están siendo vaciados de su significado real, introduciéndose normativas y prácticas que buscan obstaculizar, estigmatizar, controlar, reprimir o incluso criminalizar formas de organización social y ciudadana. Los intereses que empujan estas tendencias emplean diversas formas de control político y territorial, normalizando la violencia, la discrecionalidad y el secretismo como recursos cotidianos en el ejercicio del poder. Estas tendencias se presentan a su vez, en un contexto de debilitamiento de los sistemas de gobernanza internacionales llamados a la protección de los derechos humanos.

Este informe es un insumo para la reflexión colectiva desde la sociedad civil para promover un mejor entendimiento de las complejidades del momento actual por el que atraviesa Centroamérica. Tiene como punto de partida una mirada a la región en su conjunto, enfatizando algunas de las principales dinámicas que afectan la gobernanza territorial y la articula con el estudio preliminar de algunos territorios subnacionales en tanto escenarios donde se concretan las tendencias observadas. El informe también busca hacer un aporte sobre cómo avanzar en mejores y nuevas articulaciones entre actores de la sociedad ci-

vil para construir sociedades resilientes en un contexto adverso, enfatizando el rol de la escala territorial.

Consideramos que este contexto impone la necesidad de impulsar un esfuerzo deliberado para propiciar colaboraciones estratégicas dentro y entre diferentes campos de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En efecto, los desafíos que imponen estas dinámicas en la región son de tal magnitud y complejidad, que ningún actor territorial, comunidad rural o autoridad indígena puede enfrentarlas sola.

El informe está organizado en tres secciones: la primera plantea la mirada regional, señalando cómo la

actual crisis del Estado de Derecho se relaciona con los intereses que impulsan procesos acelerados e insostenibles de explotación de los recursos naturales, y cómo los actores territoriales, movimientos sociales y sociedad civil están reaccionando ante dicho contexto. La segunda sección vuelca la mirada hacia un mosaico de territorios rurales de Centroamérica, las dinámicas territoriales que ahí se observan y sus implicaciones para la gobernanza territorial. La tercera y última sección plantea posibles vías para profundizar colaboraciones estratégicas en ámbitos clave para el fortalecimiento, tanto de los actores territoriales inmersos en este contexto, como de sus agendas orientadas hacia la construcción de una gobernanza territorial democrática, inclusiva y sustentable.

TENDENCIAS REGIONALES: TERRITORIOS Y ACTORES EN LA ENCRUCIJADA

En contraste con la situación actual que vive Centroamérica, la década de los noventa trajo una serie de cambios que alimentaban una sensación de optimismo en el futuro de la región. En primer lugar, se logró poner fin a las guerras internas que durante décadas habían afectado a varios países. Este logro tomó varios años de diálogos, los cuales atendieron, al menos parcialmente, las causas que habían dado origen a dichos conflictos. Así, se emprendieron reformas que abrieron espacios en la sociedad civil y la política electoral, permitiendo la participación pública de actores y sectores sociales y políticos tradicionalmente excluidos o marginados de los debates de interés público en temas sociales, económicos, ambientales y políticos. Estos procesos de democratización contribuyeron a generar expectativas en el sentido de que, por fin, serían atendidas las aspiraciones de inclusión cultural, social, económica y política de las poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes y otros sectores excluidos.

Otro elemento que abonó al optimismo de la década de los noventa fueron los debates en torno a la degradación ambiental y el Desarrollo Sostenible. La segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como la Cumbre de Río (1992) fue un hito que mostraba que la degradación ambiental había alcanzado el estatus de cuestión política prioritaria a nivel global. La propuesta del Desarrollo Sostenible vino, así, a relanzar el Desarrollo como meta para los países, atendiendo los impactos ambientales que hasta entonces habían sido subestimados.

El proceso preparatorio de la Cumbre de Río y los resultados de la misma propiciaron importantes debates y una considerable movilización de recursos para fortalecer instituciones e iniciativas de incontables actores económicos y de la sociedad civil orientadas a enfrentar los variados factores y dimensiones de la degradación ambiental en una serie de ámbitos: desde

las prácticas y actitudes personales, hasta las complejas cuestiones planteadas por los modelos de desarrollo de los países, pasando por temas relativos a las relaciones entre género y medio ambiente, o los modelos de producción y negocio de los diversos sectores productivos de la economía. En Centroamérica, todo ello se reflejó en la creación de nuevas instituciones, el relanzamiento de la agenda de conservación, programas que buscaban encauzar la producción agropecuaria con objetivos de sustentabilidad. Estas y otras iniciativas regionales parecían contar con el más alto respaldo político, como lo sugería la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, un acuerdo firmado por los presidentes de la región en el año de 1994.

En esta década también comienza a tomar fuerza la agenda de la descentralización y el desarrollo local que, en términos generales, amplió las competencias de los gobiernos locales, aunque no siempre les dotó de mayores recursos. Sin embargo, parecía que había un consenso en torno a la ampliación de la autonomía municipal considerando que los gobiernos locales constituyen el nivel del Estado más próximo al ciudadano y, por lo tanto, están mejor posicionados para canalizar y atender los intereses y necesidades de la población, toda vez que tengan capacidades y recursos suficientes (FUNDEMUCA, 2011).

Todo ello se materializó en los territorios en una serie de políticas públicas y programas que proponían fortalecer las economías locales y encauzarlas en la senda del desarrollo sostenible, en un contexto que parecía brindar condiciones óptimas para que la gobernanza territorial avanzara hacia un ideal de “mayor grado de cooperación y vinculación entre el Estado y las organizaciones no estatales”, cumpliendo con imperativos normativos de “horizontalidad, la inclusión de actores de diverso tipo y el establecimiento de relaciones en los distintos niveles de gobierno” (Ballón, Rodríguez y Zeballos, 2009).

Pero es importante recalcar que, si bien las condiciones parecían óptimas para avanzar todas estas agendas, no se llevaron a cabo reformas de carácter fiscal, laboral o social que atendieran las causas más profundas que habían dado origen a los conflictos internos, tales como la exclusión y la desigualdad. Sin embargo, el proceso de democratización de la década de los noventa puso énfasis en los derechos políticos y civiles, y solo de manera secundaria en los temas del desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, tanto en Guatemala como en El Salvador, el componente socioeconómico de los acuerdos de paz fue bloqueado por fuerzas conservadoras.

Uno de los factores que favoreció dicho sesgo fue el predominio que había alcanzado, en la década de los noventa, la agenda neoliberal de privatización de activos y servicios estatales, recortes presupuestarios y apertura comercial y financiera como estrategia de inserción en la economía global. Estas ideas toman fuerza no solo en los gobiernos, también en la cooperación y en las organizaciones multilaterales, resultando en un Estado de funciones reducidas en lo social, mientras en lo económico jugaba un papel muy activo en la exposición de las economías nacionales a la globalización (Robinson, 2011).

Sin embargo, la reconstrucción de posguerra demandaba Estados capaces de atender cuestiones clave en áreas como educación, vivienda o salud. Por otra parte, también se requería construir una cultura de paz, para lo cual era necesario establecer la verdad sobre la violación a los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos durante los conflictos. Pero ocurrió lo contrario: no se avanzó lo suficiente en la depuración de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que se institucionalizaba una cultura de impunidad.

Todo ello generaba dudas sobre la falta de integralidad del proceso de democratización que se vivió en esa década. Sin embargo, el clima de optimismo que se vivía en el momento hacía suponer que la sociedad civil y las fuerzas políticas progresistas tendrían el espacio de acción para avanzar políticas públicas que atendieran cuestiones como la pobreza, las brechas

territoriales, la falta de acceso a la tierra o la exclusión cultural, económica y de género afectando a amplios sectores de la población (Azpuru et al., 2007).

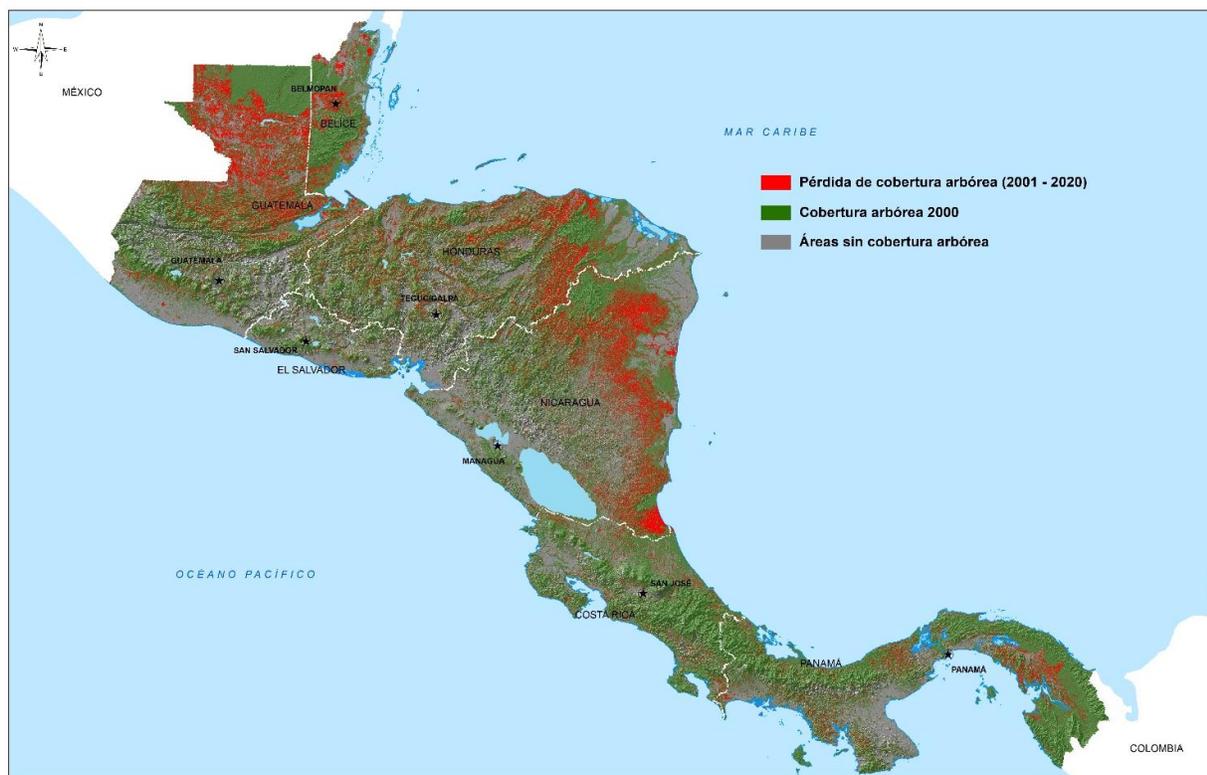
En la actualidad, Centroamérica vive una situación muy diferente a la observada en la década de los noventa. Tres tendencias definen un contexto de complejidad creciente y ante el cual resulta necesario reconstruir la esperanza: i) con respecto a la gobernanza de los recursos naturales, se observa un mayor interés, por parte de inversionistas regionales o internacionales, en los recursos naturales y territorios, que se traduce en proyectos de inversión a gran escala, ya sea en industrias extractivas, monocultivos o infraestructura, con importantes implicaciones para la construcción de resiliencia ante el cambio climático; ii) la agudización de tendencias sociopolíticas que amenazan las condiciones mínimas para la efectiva participación de las comunidades locales y otros sectores de la sociedad civil en la gobernanza de sus territorios y recursos; iii) cambios relevantes en la sociedad civil y actores sociales que, por una parte, lideran luchas de resistencia frente a procesos de desposesión territorial y que, por otra promueven nuevos enfoques para la gobernanza de los recursos naturales y de los territorios.

Mayor interés por la explotación comercial de los recursos naturales de los territorios rurales en Centroamérica

Ya desde la década de los noventa, la política de atracción de inversiones facilitó una serie de proyectos en actividades como el turismo, la generación de energía, o la minería, mediante la reformulación de marcos de incentivos, la facilitación activa de permisos o la cooperación de los gobiernos locales (Davis y Díaz, 2014).

Centroamérica experimenta hoy una serie de cambios que reflejan un reforzamiento de ese interés por explotar los recursos naturales de sus territorios rurales, tendencias que reproducen y profundizan patrones históricos de exclusión, vulnerabilidad y degradación ambiental (ver Mapa 1). Esas tendencias se refieren al aumento de la incorporación de zonas rurales a la globalización, incluyendo la expansión de cultivos para la agroindustria, biocombustibles, el aumento

Mapa 1
Centroamérica: Pérdida de cobertura arbórea 2001 - 2020



Fuente: Elaboración propia según Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, accedido a través de Global Forest Watch (2022); INETER, 2022 y MEM (2021)

de proyectos extractivistas (minerales, hidrocarburos, etc.). También se observa un aumento de megaproyectos de infraestructura (transporte, energía renovable y no renovable, etc.), que forman parte de estrategias más amplias que están convirtiendo a Centroamérica en una plataforma logística para el comercio, los servicios y el turismo. Si además de estas tendencias se toma en cuenta que diversos actores ilícitos despliegan estrategias basadas en la violencia para el uso y control de distintos territorios de la región, se observa una mayor complejidad en las dinámicas de exclusión y degradación que repercuten en una mayor conflictividad socioambiental, en los medios de vida y en los derechos de comunidades forestales, campesinas y de agricultura familiar, así como en pueblos indígenas y afrodescendientes.

La crisis global provocada por la pandemia ha venido a profundizar estas tendencias, obligando a los gobiernos a contraer mayor endeudamiento y a encon-

trar factible como fuentes de divisas y de ingresos fiscales, el incremento de las exportaciones de recursos naturales, provocados también por un reordenamiento a nivel mundial de los países como fuentes de *commodities* para el mercado internacional, incluyendo la expansión de cultivos agroindustriales y sistemas agroalimentarios comerciales y proyectos extractivistas (minerales, hidrocarburos, recursos forestales, etc.) (PRISMA, 2020a).

Expansión de cultivos para la agroindustria y sistemas agroalimentarios

El auge de la agroexportación y la expansión del agronegocio son tendencias generalizadas del tipo de agricultura que se ha venido incentivando en la región centroamericana, orientada principalmente hacia una agricultura industrial de alta rentabilidad en detrimento de una agenda comprometida con la soberanía alimentaria. Estos cultivos se han visto favo-

recidos por políticas de mitigación de cambio climático, que han priorizado biocombustibles y agrocombustibles para reducir las emisiones de bióxido de carbono (CLACSO, 2018; Davis y Díaz, 2014).

La palma africana y la caña de azúcar han experimentado una expansión dramática en las últimas dos décadas, la palma africana pasó de 102,390 ha en el año 2000 a tener 516,412 ha en 2020, quintuplicándose su área cosechada en estos 20 años (tasa de incremento del 404%). Se destacan Guatemala que es el país con mayor área cosechada en 2020 con 198,000 ha, aumentando su área 9 veces (tasa de incremento de 843%), sin embargo, el país que ha crecido de una manera exponencial es Nicaragua, pasando de 2,000 ha en el año 2000 a 33,000 ha en 2020, aumentando su área cosechada 16 veces (tasa de incremento de 1,572%) (ver Gráfico 1).

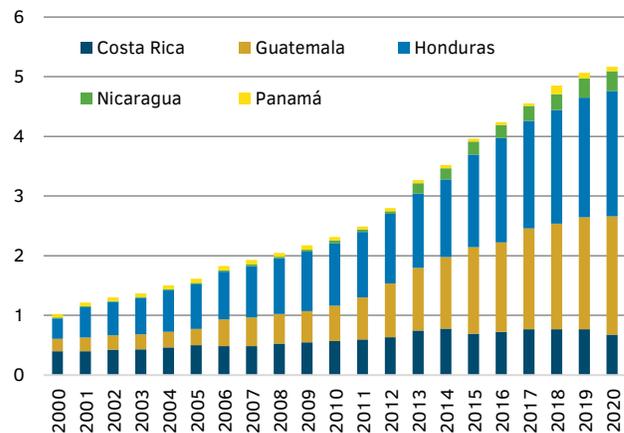
En el caso de la caña de azúcar, si bien no ha tenido un crecimiento tan fuerte comparado con la palma africana, el área cosechada en la región centroamericana aumentó de 420,490 ha en 2000 a 565,000 en 2020, teniendo un incremento de 34%. El mayor productor es Guatemala que tiene 251,020 ha de área cosechada (tasa de incremento de 37%), sin embargo, son Nicaragua y Panamá los que tienen mayor incremento, 53% y 51% respectivamente (ver Gráfico 2).

Las inversiones en cultivos agroindustriales y ganadería a gran escala son muestras del interés persistente de los inversionistas por el control de la tierra. Las inversiones ya no se dan por países, sino a escala regional, a través de la compra directa, inclusive en territorios indígenas legalmente reconocidos, generando una alta concentración de los recursos y de la tierra, mucho mayor que en períodos anteriores (PRISMA, 2019a).

Aumento del extractivismo: Minería metálica e hidrocarburos

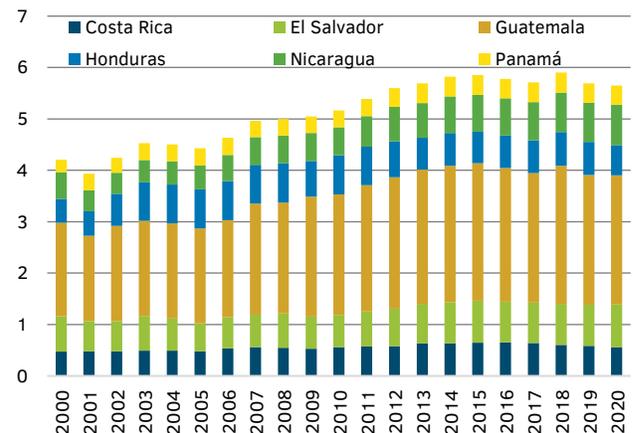
Durante los últimos 15 años se ha identificado un auge en las industrias extractivas a nivel mundial. Si

Gráfico 1
Palma africana en Centroamérica:
Área cosechada 2000-2020 (Cien miles de hectáreas)



Fuente: FAOSTAT (2022)

Caña de azúcar en Centroamérica:
Área cosechada 2000-2020
(Cien miles de hectáreas)

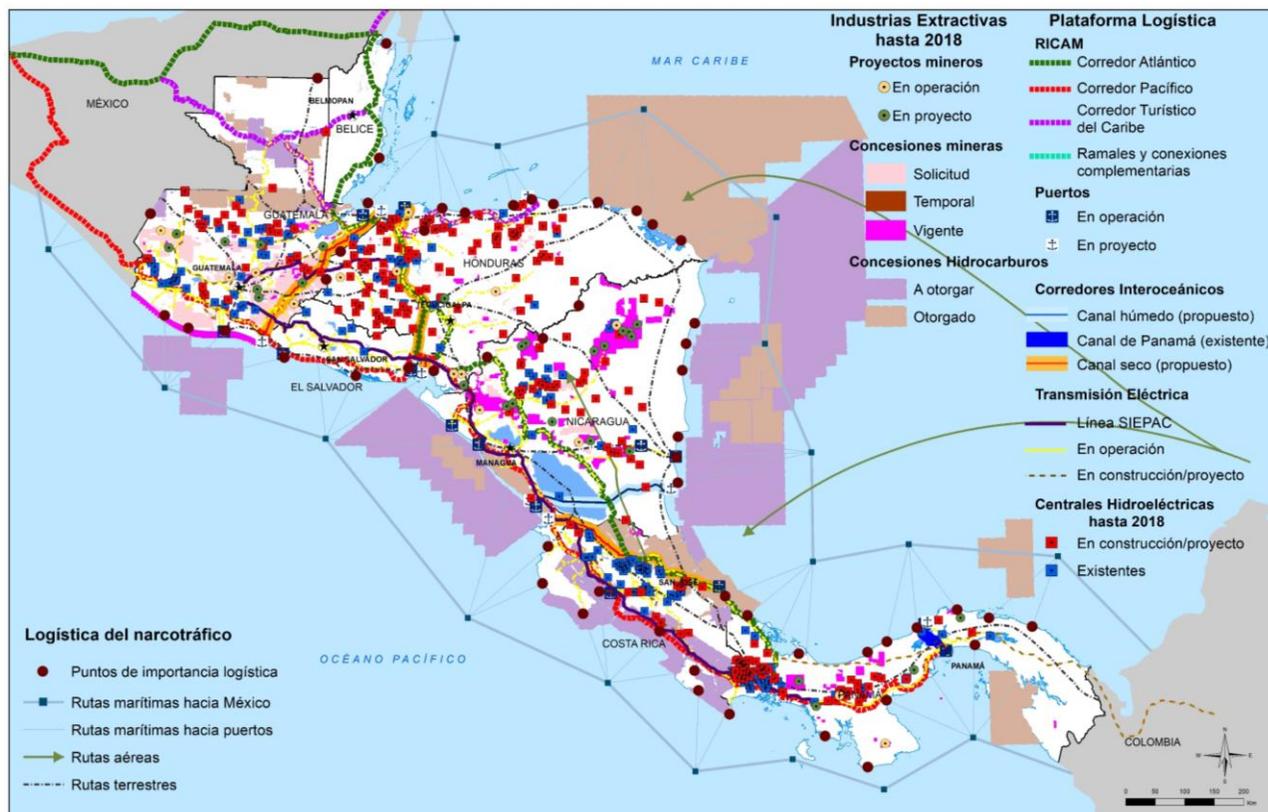


Fuente: FAOSTAT (2022)

bien esta actividad no es nueva en la región, se ha observado una nueva capacidad de extracción a gran escala, potenciando la explotación indiscriminada de los recursos naturales con objetivos exportadores, impulsando hacia nuevas fronteras de extracción (ver Mapa 2).¹

¹ En territorios de la costa Caribe se asocian a fuertes inversiones en industrias extractivas e infraestructura, donde resalta el traslape con áreas protegidas y territorios indígenas emblemáticos, tales como áreas protegidas en Petén, la Mosquitia hondureña y nicaragüense o las reservas de cobre en la comarca Ngäbé Buglé (Sauls y Rosa, 2019).

Mapa 2
Centroamérica: Industrias extractivas, plataforma logística y corredores ilícitos del narcotráfico



Fuente: Elaboración propia según Geocomunes (2018) y Ventura (2014) <https://vaventura.com/divulgacion/geografia/camino-la-droga>

Las actividades extractivas no representan gran parte del producto interno bruto de la región, sin embargo, son importantes para el funcionamiento de los Estados como fuente de financiamiento de los presupuestos nacionales. La orientación de la mayoría de estos países a un desarrollo basado en el extractivismo responde a las demandas de la economía global (precios de mercancía, apertura a inversiones privadas globales), y refleja la consolidación de los grupos económicos poderosos al nivel regional-nacional. Entre las presiones por desregular la economía de las instituciones internacionales y las oportunidades financieras identificadas por las élites (PRISMA, 2019b). El rasgo distintivo de estas inversiones es que se imponen a las poblaciones locales de manera arbitraria, conllevan el acaparamiento de tierras, competencia por el recurso hídrico o su contaminación, desencadenando una serie de graves conflictos. En varios casos el Estado ha respondido a estos conflictos con una militarización de los territorios y criminalización de la

protesta social. No en vano, países como Honduras, Nicaragua y Guatemala aparecen liderando el listado de países con más asesinatos per cápita relacionados con activistas ambientales y defensores del territorio, siendo las industrias extractivas el principal sector que causa estos delitos (Bebbington et al., 2019; Global Witness, 2020a; CALAS, 2019).

Infraestructura de transporte, energía y plataforma logística para el comercio, los servicios y el turismo

Durante las últimas décadas, el contexto de globalización consolidó grupos económicos que operan a escala nacional y regional, cuyas estrategias promueven una visión de desarrollo que enfatiza la combinación de crecimiento económico, integración geográfica y promoción de grandes inversiones nacionales e internacionales (Bebbington, 2013; Davis y Díaz,

2014). Muchas de estas inversiones se basan en la noción de Centroamérica como una plataforma logística internacional que vincula el océano Atlántico con el Pacífico y el sur con el norte de América, con una serie de megaproyectos de inversión (infraestructura de transporte, energía, comunicaciones, etc.) en territorios que, hasta hace poco estaban fuera de la mirada de las principales estrategias de acumulación en la región (PRISMA, 2019b).

Esto replanteó el rol de las zonas rurales y del territorio, que se vieron afectados por la escala, intensidad y los tiempos relativamente cortos en que se ejecutan estos proyectos, dando lugar a fuertes impactos y conflictos a lo largo y ancho de la región. Esta tendencia no es nueva, ni exclusiva de Centroamérica. Desde 2001, una serie de megaproyectos contenidos en el denominado Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) en Centroamérica y México, promovieron la modernización y ampliación de puertos y aeropuertos, el establecimiento de la Red Interamericana de Carreteras (RICAM), el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y la Red Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA) (ver Mapa 2). El Proyecto Mesoamérica también buscaba la conectividad con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), impulsando así una agenda de modernización de la infraestructura física a través de megaproyectos en toda América Latina. En 2008, el Proyecto Mesoamérica, incluyó la incorporación de Colombia y República Dominicana, y estructuró una serie de proyectos para avanzar en la interconexión de la infraestructura de transporte, la integración energética mesoamericana, la interconexión e integración de servicios de telecomunicaciones, y la facilitación comercial y de competitividad (Cuéllar y otros, 2012).

Más recientemente, como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 los gobiernos buscan dar continuidad a grandes obras de infraestructura, como los contenidos en el Plan de Desarrollo Integral para el Triángulo Norte y el sureste de México (CEPAL, 2021) y el Tren Maya, una propuesta de inversiones para la promoción del turismo y el desarrollo urbano que abarca territorios de México, Guatemala y Belice.

Estos proyectos de infraestructura tienen relaciones sinérgicas con la expansión de las fronteras agrícolas y de extracción de recursos (Bebbington y otros, 2018), pero también transforman relaciones entre la sociedad, el territorio y el medio ambiente con implicaciones para la gobernanza, la resiliencia y la sustentabilidad, en la medida que están incrustadas en redes asimétricas de relaciones sociales (Delpino Marimón y otros, 2021).

Desafíos del cambio climático y contradicciones para la adaptación y mitigación

En este contexto de exclusión, degradación ambiental y del renovado interés por los recursos naturales y territoriales, Centroamérica también debe enfrentar los severos y crecientes impactos de la variabilidad y el cambio climático. En efecto, Centroamérica es una de las regiones de mayor riesgo climático en el mundo, lo cual se debe a la combinación de factores biofísicos y sociales: su ubicación entre dos océanos en la zona de convergencia intertropical y su topografía accidentada, la expone a crecientes amenazas climáticas, como una mayor frecuencia e intensidad de eventos con excesos de lluvia e inundaciones, sequías más severas y prolongadas, el aumento en la temperatura promedio, así como el aumento del nivel del mar que se manifiestan por toda la región; mientras que la severa degradación ambiental y los patrones de exclusión social y económica configuran un contexto de vulnerabilidad que magnifica los enormes y recurrentes impactos del cambio climático.

La expansión de actividades extractivas –caña de azúcar, palma africana, hidroelectricidad, minería, etc.– han restringido aún más el acceso de las comunidades rurales a los recursos naturales, profundizando la degradación y propiciando la agudización de conflictos por el control de la tierra, el agua y los bosques, además de debilitar los sistemas de gobernanza local-territorial.

Los impactos asociados a la variabilidad y el cambio climático tienen múltiples expresiones territoriales en la región. Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, destaca el Corredor Seco Centroamericano que se ex-

tiende desde Guatemala hasta Panamá (incluye el llamado “arco seco”), donde las condiciones climáticas de sequía afectan la producción de granos básicos y comprometen de manera recurrente la seguridad alimentaria de una parte importante de la población. La sequía de 2018 provocó pérdidas en 281 mil hectáreas de maíz y frijol en Guatemala, Honduras y El Salvador, afectando la seguridad alimentaria de más de 2 millones de personas (FAO, 2018). Pero los excesos de lluvia también impactan a esta vertiente; solo en El Salvador, tres eventos con excesos de lluvia entre el 2009 y 2011 significaron US\$ 1,267 millones en pérdidas y daños, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto (MARN, 2012; PRISMA, 2019d).

En la vertiente del Caribe, los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020, impactaron a Centroamérica, principalmente Nicaragua, Honduras y Guatemala, dejando a su paso casi 10 millones de personas afectadas, cuantiosos daños y pérdidas, así como numerosas comunidades destruidas, incomunicadas e inaccesibles por las severas inundaciones y deslizamientos, impactos que se vieron agravados por la pandemia del COVID-19 (OPS, 2020) y las condiciones de vulnerabilidad. Esto se suma a los impactos de los huracanes Mitch (1998), Stan (2005) y Félix (2007) que también tuvieron impactos considerables, tanto en pérdidas de vidas humanas, como en daños sobre la producción, la economía y la infraestructura. Por otra parte, el aumento en el nivel del mar ya ha ocasionado que en el pueblo Kuna de Panamá se haya visto obligado a contar con un primer grupo de desplazados climáticos, pues obligó a trasladar a tierra firme a 8 comunidades asentadas en varias islas, afectando sus medios de vida tradicionales (ecoturismo, pesca y artesanía) con claras implicaciones sobre sus condiciones de autonomía, cultura y formas de organización (Ambientum, 2019). En la Muskitia hondureña, las inundaciones impactan sistemáticamente en la pérdida de cultivos y en la actividad pesquera, que son la base de los medios de vida de la población, en su mayoría pobres (MFEWS, 2015).

Ante los desafíos del cambio climático, los países no han sido eficaces en articular propuestas y marcos de actuación centrados en la vulnerabilidad. En las iniciativas climáticas nacionales predomina el interés de

aprovechar oportunidades de financiamiento vinculadas con la mitigación del cambio climático, que refuerzan estrategias de inversión en sectores como energía, en detrimento de acciones enérgicas de adaptación, eso a pesar de la bajísima contribución de la región a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, las acciones de adaptación tienen menos peso en las propuestas de los países y, en general, no toman en cuenta la complejidad de las dinámicas de exclusión y degradación o la conflictividad socioambiental predominante en los territorios.

De parte del sector privado las respuestas son heterogéneas y contradictorias. Por una parte, se observa que la mayoría de sus proyectos de inversión y explotación de recursos naturales no consideran el cambio climático, ni criterios de sustentabilidad. Por otra parte, algunos actores del sector privado encuentran en la mitigación del cambio climático nuevas oportunidades de inversión, tal como ocurre con ciertas inversiones en energía renovable –como la hidroelectricidad o los agrocombustibles– las cuales generan una conflictividad social que termina socavando las posibilidades de adaptación. Estas nuevas oportunidades de inversión del sector privado forman parte del ajuste a sus modelos de negocio y a menudo son presentados como acciones de responsabilidad social y ambiental, les posibilitan acceder a nuevos canales de financiamiento, a legitimar sus actividades económicas y a mantener su presencia en espacios en los que se discuten las respuestas frente al cambio climático (PRISMA, 2021). Estas contradicciones reflejan una de las tensiones más importantes relativas al cambio climático en la región.

Expansión del control territorial por parte de actores ilícitos

En los últimos años, Centroamérica también se ha consolidado como corredor para las actividades ilícitas, entre las que destacan la trata de personas, armas, contrabando y principalmente el tráfico de drogas (principalmente cocaína), proveniente de países productores en Suramérica hacia su principal mercado, Estados Unidos. Los ámbitos relacionados a la cocaína comprenden la producción, transformación, trasiego, venta y lavado de dinero. Como es conocido, la producción y transformación se realiza en su gran

mayoría en Suramérica y desde principios de los años 2000, Centroamérica se ha vuelto una región de mayor importancia para el trasiego, venta y lavado de dinero, representando las principales actividades de narcotráfico en la región (PRISMA, 2019c).

El narcotráfico está transformando territorios. Por ejemplo, la dinámica de “narco-deforestación” explica la pérdida de grandes masas de bosque en zonas de Alta Verapaz, Petén, Olancho, la Mosquitia hondureña, la costa caribe de Nicaragua, y hay indicios de posibles impactos más recientes en Panamá, lugares todos ellos, donde las presiones son extremas, incluyendo el despojo y la violencia contra comunidades locales, campesinas, indígenas y forestales (PRISMA, 2019c). Los actores ilícitos vinculados con el narcotráfico despliegan estrategias de control y autoridad en los territorios (a veces asociadas a tácticas paramilitares) así como para implementar operaciones de lavado de dinero que incluyen estrategias propias de inversión económica en cultivos como la palma africana y la ganadería (McSweeney et al., 2017).

En Guatemala, el control territorial de agentes locales en colaboración con carteles ha generado un sistema de control y autoridad territorial continuo durante los últimos 15 años (PRISMA, 2019b). Una reciente investigación enfocada en la costa caribe de Honduras, Nicaragua y Costa Rica encontró que la corrupción, la competencia electoral y la politización de la seguridad, son factores que determinan el tipo de relación que establecen los grupos criminales organizados con un Estado en particular y la estrategia principal que despliegan (cooptación, colusión o evasión), lo que a su vez explica los diferentes niveles de violencia relacionada con el tráfico de drogas en Centroamérica (Blume, 2022).

Los enormes beneficios de este tipo de negocios han permitido a estos grupos incrementar sus inversiones, diversificar sus actividades, penetrar en nuevos nichos de mercado (lícitos e ilícitos), lograr el control de nuevos territorios y tejer nuevas relaciones en esferas políticas y empresariales influyentes, dando pie a una nueva dinámica que impacta a las economías locales, no sin antes, sembrar en la región un clima de inseguridad y violencia. A medida que las economías ilícitas

ingresan en los territorios, la ilicitud coproduce y subsidia lo lícito, allanando el camino para economías lícitas en las que invertir, lavar y aumentar las reservas de dinero de las drogas (Sauls y otros, 2022). Así, a la expansión de la ganadería y el cultivo de la palma africana, también se asocian voluminosas inversiones en otros cultivos (melones, por ejemplo), en el turismo, en inmobiliarias y en la industria del juego (casinos, juegos de azar, loterías, etc.) como formas de lavar dinero y de establecer control territorial (PRISMA, 2019c).

Estado de Derecho, participación y ejercicio del poder

Los cambios institucionales impulsados en la región tras el fin de los conflictos armados, en los años 1990, buscaban establecer una base mínima para la convivencia democrática, entendiéndose por ello un marco de protección de los derechos humanos y la apertura de oportunidades de participación social y política para sectores históricamente excluidos de los espacios y mecanismos de toma de decisiones. Al mismo tiempo, se vio una expansión de los derechos territoriales para poblaciones indígenas en países como Honduras y Nicaragua. Sin embargo, discursos oficiales que hablan de derechos en general y derechos territoriales, en particular, contrastan con los retrocesos notables que estos tienen en la práctica. Los casos de Nicaragua y Honduras son característicos de esta situación. En ambos países ciertos pueblos indígenas obtuvieron importantes victorias con el reconocimiento y titulación de sus tierras colectivas. Sin embargo, ambos Estados han carecido de la voluntad política para implementar esos derechos en la práctica, en particular por la falta de procedimientos para detener y revertir la invasión de dichos territorios. Ante la presencia de actores violentos que invaden y acaparan las tierras, las organizaciones indígenas necesitan el respaldo del Estado para hacer cumplir los títulos colectivos de propiedad.

En general, se observa una tendencia a vaciar de su significado real los derechos ganados en épocas anteriores, y se comienza a constatar la elaboración de normativas que buscan restringir, dificultar, reprimir

o controlar formas de organización social y comunitaria. Esta tendencia se observa de manera más clara en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. En Nicaragua se están ilegalizando decenas de organizaciones de la sociedad civil. En Guatemala, el Estado criminaliza a líderes sociales, al igual que ha venido pasando en Honduras. También en Guatemala, al igual que en Nicaragua, se han emitido leyes que restringen la actividad de las ONG. En El Salvador se han preparado leyes que buscan un mayor control de las ONG, y el régimen de excepción, inicialmente adoptado para responder a una emergencia, ha sido prorrogado seis veces. Las excepciones en este paisaje siguen siendo Costa Rica y Panamá, pero ambos países presentan niveles crecientes de desigualdad socioeconómica que están erosionando la legitimidad de sus instituciones. Panamá ha vivido un año marcado por importantes movilizaciones sociales, y se está a la expectativa de los resultados que pueda tener el proceso de diálogo nacional en marcha, con participación de sectores sociales e indígenas. En Costa Rica se vive un reacomodo completo de su sistema de partidos, en un contexto en el que ganan visibilidad discursos que justifican formas arbitrarias o personalistas de ejercer el poder político bajo argumentos de eficiencia o urgencia.

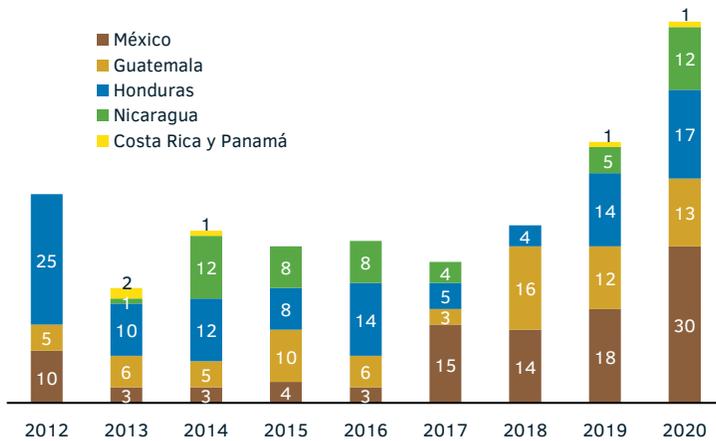
En síntesis, varios países viven ya, o están al borde, de una ruptura del Estado de Derecho. El principal factor detrás de esta tendencia es el tipo de influencia que, sobre el Estado, ejercen las élites económicas, cuyos intereses se entretajan con los de capitales regionales y transnacionales. Un rasgo histórico de los Estados en la región ha sido su cooptación por parte de grupos de poder que entretajan sus intereses particulares con el actuar cotidiano de los órganos de Estado. De allí surgió un entramado institucional que funciona con una lógica patrimonialista, es decir, donde los funcionarios, conscientes de su papel clave en la intermediación entre élites y Estado, deciden sobre la institucionalidad como si fuera su patrimonio personal. Es decir, el fenómeno de la “corrupción” no es algo que se puede entender sin esos elementos históricos y el papel de las élites económicas. Junto a la continuidad histórica de la influencia de las élites tradicionales, aparecen nuevos actores vinculados a actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico, quienes aprovechan esa cultura patrimonialista para

establecer vínculos con el Estado, incluso en las más altas esferas políticas. Estos actores también despliegan diversas estrategias de control territorial. Dinámicas como la “narco-ganadería” y “narco-deforestación” son expresiones de ello.

En el ámbito regional, la captura del Estado se manifiesta en distintos fenómenos. En Guatemala, El Salvador y Honduras, los casos de corrupción han generado crisis políticas de distinto alcance. Los partidos políticos organizados en torno a tendencias ideológicas (catalogados de izquierda o derecha) pierden relevancia. Esto propicia la aparición de movimientos políticos donde la figura de un caudillo o líder carismático tiene más importancia que las orientaciones ideológicas o programáticas. Incluso partidos ideológicos como el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua presentan esta tendencia. En El Salvador, un nuevo grupo de poder político-económico tiene hoy el control de todo el aparato estatal, propiciando un reacomodo dentro de las élites tradicionales. En Honduras, si bien se han emprendido acciones legales en contra del entramado de corrupción heredado de gobiernos anteriores, la influencia de las élites de Olancho ha logrado que el gobierno actual legitime la llamada narco-carretera, una vía construida ilegalmente por intereses vinculados a la narco-ganadería en el corazón de la Mosquitia. Por otra parte, el escándalo internacional de los Panamá Papers puso al descubierto los mecanismos usados por las élites globales y de la región para evadir impuestos y lavar dinero. Precisamente la corrupción y la desconfianza hacia la élite político-empresarial, fue uno de los detonantes de las protestas de mediados del 2022 en Panamá.

Esto tiene implicaciones graves para la legitimidad y representatividad de los sistemas políticos en los países. La población percibe que las instituciones —desde los gobiernos locales y partidos políticos, hasta los sistemas de justicia y gobiernos nacionales— actúan abiertamente como herramientas en la búsqueda y el ejercicio del poder, perdiendo credibilidad. Sin capacidades o legitimidad suficiente, el Estado aborda la conflictividad social y territorial empleando su aparato coercitivo, reprimiendo y criminalizando liderazgos sociales y comunitarios (ver Gráfico 3). De manera similar, los poderes fácticos han comenzado a

Gráfico 3
Defensores ambientales y territoriales asesinados
en países de Mesoamérica (2012-2020)



Fuente: Elaborado con base en información de Global Witness

utilizar esos mismos instrumentos para acosar a quienes han puesto en evidencia las redes cleptocráticas: periodistas, líderes de opinión e, incluso, operadores de justicia que lideraron avances contra la impunidad. Adicionalmente se atacan las expresiones de diversidad y se cierran espacios y mecanismos de participación ciudadana.

A pesar de los intentos de avanzar hacia una cultura de paz, a través de espacios institucionales concretos como las comisiones de la verdad y las procuradurías de Derechos Humanos, la violencia nunca ha dejado de ser un recurso de control social empleado por diversos actores en la región. En determinados territorios, la presencia de actividades ilícitas y extractivas conlleva una alta disponibilidad de armas y la presencia de especialistas de violencia. Por otra parte, desde el aparato del Estado se normaliza la militarización de la seguridad civil. Se observa también tendencias preocupantes en la cultura popular, donde la figura del narco, que hace ostentación de su dinero y poder, se vuelve un referente para las expectativas de los jóvenes y sus proyectos de vida. La presencia cotidiana de imágenes de violencia, y agentes armados, fomentan un sentimiento de indefensión que dificulta o imposibilita la gobernanza territorial democrática y sustentable.

Uno de los factores clave detrás de la normalización de la violencia es la falta de interés de las élites en

invertir en la seguridad pública y el aparato judicial para sustentar un Estado que ejerza un monopolio sobre la violencia que resulte, además de efectivo, legítimo. Al contrario, muchas veces estas élites, prefieren ceder la gobernanza en ciertas áreas a los actores de la economía ilícita, o ellas mismas participan de la violencia para defender sus privilegios, o es el mismo Estado el que aplica mecanismos de coerción de formas contrarias al derecho (Pearce, 2018).

Junto a la violencia coercitiva, se observa también un despliegue de nuevas formas de control social más “finas” o sofisticadas, valiéndose de medios de comunicación y redes sociales. Estas tecnologías favorecen la generación y la propagación de noticias falsas en plataformas digitales, usadas para influir en las corrientes de opinión y en los resultados electorales. El uso extensivo de las TIC facilita también el empleo de tecnologías para el espionaje de opositores, activistas sociales, periodistas (Forbidden Stories, 2021).

Estas tendencias se presentan, a su vez, en un contexto de debilitamiento de los sistemas de gobernanza internacionales. En el pasado, distintos tratados y organismos internacionales para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente han jugado un papel fundamental apuntalando las reivindicaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros sectores de la población vulnerados en sus derechos. La crisis de organizaciones como la ONU, la OEA, o el SICA, repercute directamente en las posibilidades de incidencia de las organizaciones de sociedad civil, gobiernos territoriales y comunales.

Estos contextos de violencia, corrupción, impunidad y erosión del Estado de Derecho tensionan y golpean los sistemas de gobernanza territorial, perdiéndose capacidades clave para sustentar medios de vida y prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales. Los actores locales y territoriales no son solamente actores de la producción sostenible o de la protección ambiental, muchos tienen también un rol clave en la cohesión social, la identidad y la vida institucional de los territorios, como parte integrante de la sociedad civil, junto a otras organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro.

Actores territoriales, movimientos sociales y sociedad civil

Los movimientos sociales de la región se han transformado dramáticamente en las últimas décadas. En los años 1980, los movimientos sociales se caracterizaban, unos, por reivindicaciones socio económicas y, otros, por buscar una transformación radical del Estado. Con el fin de las guerras civiles y la apertura de espacios democráticos florecieron nuevas organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales (Munck, 2021). Muchas ONG surgieron de la iniciativa de profesionales o activistas, mientras aparecieron nuevos movimientos, como el feminista y el ambientalista. Otros movimientos se reinventaron, como el caso del movimiento indígena, que además de luchar por sus derechos culturales comienza a reclamar el derecho a una territorialidad propia y políticas de inclusión multicultural; o también algunos movimientos campesinos que a finales de los años 1990 empieza a cuestionar el modelo agroindustrial a través de una reivindicación del saber tradicional o nuevos paradigmas relacionados con la sustentabilidad. A diferencia de los años 1980, estos movimientos no están interesados en “tomar” o transformar radicalmente el Estado, pero ello no quiere decir que se desvinculan del mismo, pues procuran impulsar reformas legales en pro de sus derechos.

En este proceso se observa una resignificación de los territorios como base de identidad y de fuente para los medios de vida y la búsqueda de construir arreglos institucionales que les hagan partícipes de una gobernanza territorial la cual buscan que sea inclusiva, sustentable y democrática. El interés de poderosos grupos económicos por impulsar sus estrategias de acumulación en estos territorios ha incrementado los conflictos socioambientales, particularmente allí donde se observa mayores niveles de organización entre la población indígena, afrodescendiente y campesina. Son precisamente estos actores territoriales rurales los que están “en primera línea” de las luchas contra la profundización del modelo neoliberal, protagonizando en los últimos años la defensa de sus derechos de acceso, uso y control sobre la tierra y otros recursos naturales (derechos territoriales), impulsando acciones concretas en pro de la sustentabilidad socioambiental (PRISMA, 2019e; PRISMA, 2020b).

A veces, observadores externos han señalado la veta ambientalista o ecologista de estos movimientos, si bien sus reivindicaciones no siempre se expresan en el vocabulario del ambientalismo (Hurtado y Lungo, 2007; Cartagena, 2017; Cordero, 2017).

Es importante reconocer que estas luchas territoriales no están enfocadas únicamente en la defensa de medios de vida o recursos naturales frente a dinámicas extractivistas o monocultivos. Los actores territoriales suelen atender distintas cuestiones de manera paralela pero integrada. Por ejemplo, los mismos movimientos que luchan por recuperar o mantener el acceso a tierras comunales, que defienden derechos territoriales, también se pronuncian y se movilizan sobre asuntos como la política fiscal o la apertura a la globalización. Al mismo tiempo, luchan por el acceso a la educación en idiomas originarios, impulsan iniciativas culturales y artísticas orientadas a fortalecer su identidad y cosmovisión. Por otra parte, no resulta extraño que estos mismos movimientos rurales, campesinos, indígenas o afrodescendientes elaboren discursos y prácticas que, además de criticar las lógicas de degradación ambiental, hacen contribuciones concretas a la sustentabilidad con formas propias de producción agroalimentaria o del uso sustentable de recursos naturales. En este proceso, los actores recuperan el saber tradicional campesino e indígena, como también suelen integrar conocimientos del mundo académico.

Así, la defensa del territorio en Centroamérica es, al mismo tiempo, una lucha por el reconocimiento social y político (de la cultura, la identidad, la autonomía), una lucha de carácter económico o distributivo (por la tierra, los medios de vida y los derechos territoriales), así como una lucha por la construcción de la resiliencia y sustentabilidad socioambiental (PRISMA, 2019c). Es importante señalar también la visibilidad e influencia que han adquirido estos actores territoriales (campesinos, indígenas, afrodescendientes) en las luchas y movilizaciones sociales en los distintos países de la región, especialmente en la última década (PRISMA, 2020b; Sáenz de Tejada, 2022).

Aparte de estos actores territoriales rurales “en primera línea”, la sociedad civil en la región incluye una

amplia gama de organizaciones cívicas, no gubernamentales y movimientos sociales que se ocupan de temas diversos: desarrollo local, asistencia a la producción campesina, medio ambiente, equidad de género, derechos humanos, educación, salud, organización comunitaria, participación ciudadana, democratización, etc. Muchas de estas organizaciones se enfocaron en responder, a las consecuencias negativas de la reducción del Estado impulsada por las políticas neoliberales (PRISMA, 2019c). Pero esta especialización también ha conducido a una alta segmentación entre distintos “sectores” dentro la sociedad civil (PRISMA, 2021).

Otra tendencia que debe destacarse es que, en las décadas pasadas, junto a esta especialización, se ha venido acumulando un alto nivel de profesionalización de las organizaciones de sociedad civil. Esto responde a la promesa del proceso de democratización, que ofreció a la ciudadanía organizada la posibilidad de influir en las decisiones de política pública. Ese trabajo de incidencia supuso para las organizaciones desarrollar capacidades especializadas para estar en condiciones de mantener un diálogo con el Estado. Sin embargo, dado que espacios de diálogo y participación en la formulación de políticas públicas se han vuelto inciertos, arbitrarios o incluso se han cerrado completamente —como ha ocurrido en Nicaragua, donde organizaciones de la sociedad civil han tenido que cerrar o exilarse ante el severo asedio y represión— las organizaciones han perdido interlocución con el Estado. Ante ello, algunas organizaciones han respondido vinculándose con actores dentro de su mismo sector para llevar su mensaje a la opinión pública en la defensa del espacio cívico. Otras han procurado mantener su relevancia vinculándose y apoyando directamente a los actores territoriales en su defensa de los recursos naturales y su identidad, mientras que otros solo están vinculados periféricamente, o no están vinculados del todo, a pesar de tener agendas con preocupaciones subyacentes compartidas. Entre las organizaciones de sociedad civil que apoyan directamente a los actores territoriales, vemos una variedad de organizaciones no-gubernamentales enfocadas en temas específicos, y/o ámbitos especializados, destacándose las de defensa del medio ambiente, pero también muchas otras en áreas como

derechos humanos y litigio, investigación, comunicaciones, asistencia técnica, formación y fortalecimiento de capacidades.

Entre los actores de la sociedad civil que no necesariamente se encuentran apoyando directamente a los actores territoriales, pero que podrían jugar un rol importante en su defensa, encontramos organizaciones de periodismo y de investigación, así como aquellas que abordan temas de transparencia y combate a la corrupción, cultura de paz, o gestión de riesgos, entre otros. Otras organizaciones y movimientos sociales comparten su cuestionamiento al modelo hegemónico neoliberal, pero ocupan espacios distintos de lucha. Por ejemplo, varios tipos de movimientos urbanos, como los de derecho a la vivienda, o las organizaciones enfocadas en luchas de reconocimiento identitario, como los movimientos de la comunidad LGBTIQ+, o ciertos movimientos de migrantes.

Los pocos vínculos entre actores territoriales y estos sectores más especializados de la sociedad civil se explica, por una parte, por la especificidad de sus agendas, en correspondencia con espacios sectoriales de las instituciones del Estado. Por otra parte, también se explica por la forma selectiva en que el Estado emplea el asedio contra líderes y organizaciones de la sociedad civil, lo que desfavorece la construcción de procesos de coordinación y articulación de agendas. A pesar de las limitaciones, existen numerosas redes de organizaciones y coaliciones que forman puentes entre distintos actores, temas y ámbitos propios de la sociedad civil.

Finalmente, vale la pena advertir que también existe un aumento pernicioso de grupos anti-derechos, que elaboran discursos de odio, y que suelen aprovechar temores sociales con una lógica populista o clientelar. En el contexto de Centroamérica, en la gran mayoría de casos, se trata de grupos patrocinados desde el Estado “que se posicionan como parte de la sociedad civil, pero que atacan los derechos humanos fundamentales y universales” (CIVICUS, 2019). En los últimos años, se han multiplicado y sofisticado sus tácticas, convirtiéndose en otra fuente de represión al espacio cívico y de mayor asedio, particularmente contra grupos tradicionalmente excluidos (Ibid).

DINÁMICAS Y GOBERNANZA EN TERRITORIOS DE CENTROAMÉRICA

Las tendencias observadas en la región son cada vez más complejas, se despliegan de manera distinta en los territorios dependiendo de la especificidad de los contextos locales, de la capacidad de los actores territoriales y de los sistemas de gobernanza. Por toda la región, diversos territorios y sus ecosistemas –desde áreas costeras, hasta zonas montañosas y de bosques– están siendo disputados y sometidos a severos procesos de degradación y exclusión; algunos ecosistemas representan los últimos remanentes de riqueza natural, incluyendo biodiversidad y reservorios de carbono, como en el caso de los bosques, pero también representan espacios donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes enfrentan “en primera línea” diferentes dinámicas económicas como resultados de la expansión extractivista, de megaproyectos de infraestructura, del turismo inmobiliario o del accionar de actores ilícitos, como los del narcotráfico.

A continuación, se presenta una serie de casos territoriales –uno por cada país de la región– que ejemplifican la diversidad y complejidad de las dinámicas predominantes, así como las implicaciones para la gobernanza territorial.

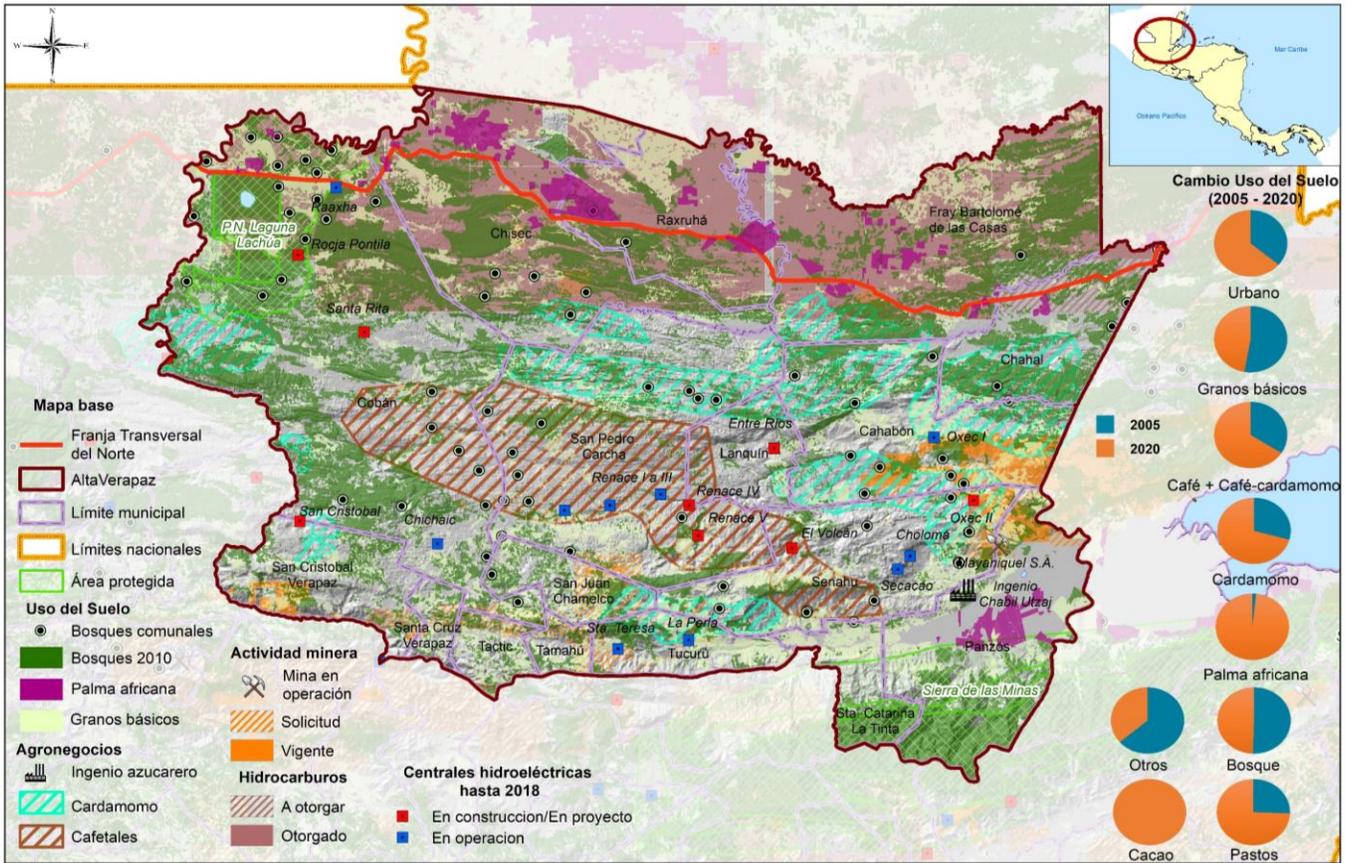
Alta Verapaz, Guatemala

El departamento de Alta Verapaz se ubica en el norte de Guatemala, limita al norte con Petén; al oeste con Quiché; al sur con Zacapa y Baja Verapaz y al este con Izabal (SEGEPLAN, 2003), su cabecera departamental es Cobán y está integrado por 16 municipios, contando con una extensión territorial de 8,686 km². Es un territorio predominantemente rural, con mucha riqueza cultural y natural, el 90% de la población es indígena, predominantemente del Pueblo Q'ueqch'í. Cuenta con bosques de gran valor ecológico y comercial, yacimientos de minerales, petróleo y ríos caudalosos. El departamento tiene una importante

producción de cultivos de exportación (café, cardamomo, cacao y achiote) donde participan pequeños productores, cooperativas y empresas comercializadoras. También hay familias dedicadas al cultivo de hortalizas, especias y otros cultivos menores, algunas de las cuales utilizan prácticas agroecológicas con fuerte liderazgo de mujeres. En el norte del departamento durante la última década se ha incrementado el cultivo de palma aceitera que se produce en fincas de grandes extensiones; se trata de inversiones de gran capital tanto nacional como mixto (nacional e internacional). Esta expansión está relacionada con prácticas de despojo violento de las tierras dedicadas a la producción familiar, además el cultivo conlleva fuertes impactos ambientales por la deforestación y contaminación (Hurtado, 2008; Fradejas et al., 2008).

Se observan tres grandes paisajes productivos: las zonas altas ubicadas en la parte sur del departamento, las del valle del río Polochic y las tierras bajas que forman parte de la Franja Transversal del Norte (FTN). El clima de Alta Verapaz se define como semi cálido muy húmedo sin estación seca definida, con temperaturas anuales promedio de los 17°C a 21°C y una precipitación promedio superior a los 2,000 mm (SEGEPLAN, 2002). Sin embargo, se observa una enorme variación del clima de un lugar a otro del departamento: aunque la altura promedio de este es de 745 msnm, su topografía es muy variada debido a la presencia de montañas y cimas de más de 2,000 metros y tierras bajas con alturas de sólo 300 metros. El bosque muy húmedo tropical ocupa el 72.37% del territorio y cuenta con especies tropicales de gran valor comercial y ecológico. Respecto al uso potencial del suelo el 56.74% corresponde a las tierras no cultivables, aptas sólo para explotación forestal o algún tipo de cultivos; sin embargo, el uso que se le da a los suelos es fundamentalmente agrícola: el 31% del uso de suelo se dedica a cultivos agrícolas de diverso tipo, especialmente granos básicos (18.6%) (MAGA, 2006).

Mapa 3
Dinámicas territoriales en Alta Verapaz, Guatemala



Fuente: Elaboración propia según Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala (2022); Geocomunes (2018); MAGA (2018); MAGA (2020)

En la producción a gran escala destacan tres productos agrícolas: café, cardamomo y palma para la producción de aceite. La palma aceitera ha tenido una acelerada expansión, en el año 2003 se contaba con 31 mil hectáreas plantadas y en el 2018 se tenía un estimado de 163 mil hectáreas (Cano, 2018 y Grepalma, 2020). Este modelo de cultivo conlleva fuertes impactos ambientales, laborales y sociales, además de una seria conflictividad por las presiones y coacción violenta para la venta de tierras que son utilizadas para la producción familiar de alimentos.

Según el XII Censo de Población y VII de Vivienda, de 2018, la población del departamento es de 1,215,038 habitantes (8.15% del total nacional). El 50.38% de la población es femenina y del total de la población del departamento, el 68.75% vive en áreas consideradas rurales. Alta Verapaz tiene un alto porcentaje de población joven, el 38.9% se ubica en el

rango de edad de 0 a 14 años y el 29.7% en el rango de 15 a 29 años. Más del 90% de la población total del departamento es indígena, siendo el Pueblo Q'ueqchí el grupo étnico predominante, y el Pocomchí el segundo en importancia.

Los indicadores sociales del departamento son alarmantes, el nivel de pobreza general es del 83.1% siendo el departamento más pobre de Guatemala, que tiene un promedio nacional de 59.3%. En Alta Verapaz el 53.6% de la población se encuentra en pobreza extrema, de acuerdo con la Encuesta de Salud Materno Infantil (ENSMI) de 2015 y el promedio de desnutrición crónica es del 50%. La Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación efectuada por Risp a finales del año 2020 dio como resultado que la inseguridad alimentaria en este territorio alcanza valores cercanos al 60% (Cano, 2021).

Principales dinámicas territoriales

La riqueza natural y la diversidad productiva del departamento contrasta con los peores indicadores de pobreza y desnutrición, como resultado de la estructura de desigualdad predominante en el territorio que se ha ido formando desde la independencia, cuando los gobiernos liberales fomentaron la exportación del café, facilitando la apropiación de tierras del pueblo Q'ueqch'í por parte de empresarios migrantes europeos que tomaron el control de la región junto con las élites nacionales usando diversos mecanismos como la Ley Agraria para apropiarse de las tierras comunales y ejidales (Quiles, 2019).

Durante el siglo XX los modelos de desarrollo continuaron respondiendo a las necesidades de las élites económicas, el Estado concibió una agenda de desarrollo de alcance regional en la denominada Franja Transversal del Norte (FTN),² que en 1954 surge como zona de alto interés por su riqueza natural. Los gobiernos militares impulsaron la colonización rural en este territorio como válvula de escape frente a las presiones campesinas sobre la tierra, sin embargo, lo que prevaleció fue la apropiación de tierras y explotación de recursos por grupos empresariales y militares que sabían de la existencia de petróleo y minerales (Solano, 2007). El conflicto armado en los años 1960 frena esta tendencia y Alta Verapaz se convierte en una zona de enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas armadas. Como resultado de la militarización de la región se producen numerosas masacres, entre estas la Masacre de Panzós en 1973, donde murieron 53 campesinos, hombres, mujeres y niños ametrallados por militares cuando reclamaban la titulación de tierras (CEH, 1999).

Los Acuerdos de Paz (1996) abrieron un escenario favorable a un nuevo ciclo de inversiones petroleras, mineras, hidroeléctricas, expansión de monocultivos caña y palma aceitera, cobrando fuerza la construcción de la carretera de la FTN en el marco del Plan Puebla Panamá y el Proyecto Mesoamérica. Estos modelos económico-políticos arrastran conflictos

agrarios y desalojos violentos de población. En 2009 se elabora el Diagnóstico y primeras líneas del plan de desarrollo de la FTN, el documento reconoce la fuerte conflictividad territorial, asimismo se despliega un proceso de consulta e integración interinstitucional, en contraste en el territorio se incrementa la conflictividad vinculada a la creciente dinámica extractivista (Solano, 2012). El departamento de Alta Verapaz se caracteriza por una alta diversidad productiva dedicada a la exportación y a la producción de alimentos para consumo familiar, pero con una marcada dualidad respecto a la tenencia de la tierra, grandes latifundios y sistemas de agronegocios están dominados por élites económicas (Sosa, 2016) que producen principalmente café y palma aceitera, la agricultura familiar en pequeña escala produce no solo granos básicos sino también cultivos diversos como frutas y hortalizas, además de productos de exportación entre estos cardamomo, cacao y achiote. Alta Verapaz, es el principal productor de cardamomo en Guatemala y produce el 31% del cacao al nivel nacional. Las organizaciones públicas, privadas y la cooperación han contribuido al incremento de la producción de calidad y desarrollo de capacidades en productores en el departamento, especialmente en el caso del cacao (Tapia, 2018).

Sin embargo, los productores familiares vinculados a las cadenas de exportación generalmente dependen de intermediarios (“coyotes”) que les compran el producto de forma directa en sus parcelas, luego los comercializan a diversos compradores incluyendo mayoristas o grandes mayoristas. En general, en las cadenas productivas para exportación los pequeños productores son sumamente vulnerables, dependen de los paquetes tecnológicos que les brindan los intermediarios, los cuales adquieren como préstamo y pagan muchas veces con la misma producción, además tienen poca capacidad de negociación en el precio de compra, por lo que se ven obligados a vender a precios de mercado que les dicta el intermediario. Los agricultores familiares cargan con todos los costos, tareas y riesgos de producción. En los últimos años,

² Incluye zonas de los departamentos de Q'ueqch'í, Alta Verapaz e Izabal, un total de 13 municipios: 4 en Quiché (Chajul, Nebaj, Uspantán, Ixcán); 7 en Alta Verapaz (Cobán, San Pedro Carchá, Lanquín, Cahabón, Chisec, Chahal y Fray Bartolomé de Las Casas) y 2 en Izabal (Livingston y El Estor).

la fluctuación de precios de los productos, los impactos del clima y la pandemia por COVID-19, han afectado la economía familiar reduciendo sus ingresos y produciendo impactos negativos en la cantidad y calidad de la alimentación de las familias (Cano, 2021).

Los productores familiares se mueven en cadenas productivas como el eslabón más débil al no contar con incentivos económicos, asistencia técnica sistemática, seguros agrícolas, soportes productivos y mucho menos políticas públicas de apoyo. Existe una fuerte preocupación en las familias por esta situación de incertidumbre, particularmente en las mujeres quienes están buscando alternativas más diversificadas para asegurar el alimento y contar con distintas opciones de comercialización.

Los eventos climáticos extremos profundizan la vulnerabilidad socioambiental, impactando en los medios de vida de la población rural. Entre 1974 y 2004 las sequías más severas del país se registraron en los territorios de Alta Verapaz y Petén; en el año 2012, el fenómeno de El Niño impactó con un período de fuerte sequía en el territorio sur de Alta Verapaz (GWP, 2014), posteriormente a finales de 2020 las tormentas tropicales Eta e Iota dejaron graves pérdidas y daños por las inundaciones, afectando la producción de granos básicos y hortalizas, situación que dio lugar al despliegue de proyectos de emergencia (Cano, 2021). En cuanto al COVID-19 ha tenido impactos negativos, debido a las restricciones de movilidad impuestas por el confinamiento, que interrumpieron la comercialización, produciendo una baja de ventas y la consiguiente afectación de ingresos en los productores. Esto repercutió en la cantidad y calidad de alimentación, así como en el endeudamiento, la reducción de gastos del hogar e inclusive la migración laboral (Ibid).

Hay varios conflictos activos vinculados a la expansión de monocultivos y megaproyectos que buscan aprovechar los importantes recursos del territorio y entran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas. En el valle del río Polochic, los cultivos agroindustriales han ido avanzando, especialmente la palma aceitera y la caña de azúcar. La palma aceitera se expande en las tierras bajas del norte y los departamentos que componen esta región (Petén, Izabal,

Alta Verapaz y Quiché). En Alta Verapaz la expansión de la palma se observa en los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de Las Casas, Panzós, Chahal y Cobán (Hurtado, 2008). En la década pasada las zonas de expansión de caña registraron la mayor cantidad de conflictos por las disputas de derechos.

La expansión de monocultivos ha sido facilitada por la banca multilateral y la acción del Estado a través de un programa de regularización de tierras y la creación de nuevos mecanismos para expandir la producción en parcelas campesinas con programas de fomento de la producción de palma entre pequeños productores (PRORURAL) (Grünberg et al., 2012). En el norte del departamento, hay procesos de expansión de la ganadería, también facilitada en gran medida por los programas de regularización de tierras, se trata de un proceso vinculado directamente con el aumento en la superficie de la palma africana, puesto que los ganaderos venden sus tierras y migran hacia el norte, frecuentemente hacia áreas protegidas (Cuéllar et al., 2012).

La dinámica de expansión de monocultivos produce fuertes disputas entre dos formas de apropiación y utilización del territorio. Los grupos económicos nacionales y transnacionales buscan mayor rentabilidad a través del uso extensivo y concentración de la tierra y el agua, frente a formas territoriales del Pueblo Q'ueqch'í y movimientos campesinos basados en subsistencia con un régimen informal de propiedad social y organización comunitaria. Estas disputas por el control de los recursos naturales, antes manejados por los pueblos originarios, tienen implicaciones en los flujos migratorios y despoblamiento de territorios, la violencia con que se ha producido la reconcentración de la tierra hace que muchos campesinos se vean obligados a migrar, ya sea hacia Estados Unidos u otras partes de Guatemala.

Sobre los ríos Cahabón, Oxec y sus afluentes hay siete represas. Las comunidades se han opuesto al encauzamiento de los ríos debido a sus repercusiones ambientales, denunciando la tala ilegal y la violación a los derechos internacionales de pueblos indígenas, pues además de no ser consultados el río y sus bosques son considerados sagrados a su vez las comunidades dependen de la pesca y el agua para sus medios de

vida. Las acciones comunitarias de resistencia frente a las represas han dado lugar a la criminalización de líderes. Esta conflictividad explica que Alta Verapaz sea uno de los departamentos donde se reportan más agresiones a líderes comunitarios e indígenas defensores del territorio y la naturaleza (De Luis R. y Rodríguez Carmona, 2016). La penetración del narcotráfico en el tejido social y la vida política del territorio complejiza esta situación de violencia, de acuerdo con Briscoe y Rodríguez (2010) los grupos ilícitos buscan crear condiciones para moverse libremente en el territorio comprando voluntades y simpatías entre distintos actores y de este modo aprovechar la ruta terrestre que une la costa Atlántica y la frontera con México.

Implicaciones para la gobernanza

Alta Verapaz refleja temas críticos para la gobernanza en Centroamérica, los cuales se expresan en la serie de reivindicaciones de las organizaciones campesinas e indígenas por el derecho a la tierra, la naturaleza y la soberanía alimentaria frente a modelos que propician el despojo violento, la exclusión, la degradación y ahondan la vulnerabilidad social y ambiental, favoreciendo la migración interna y hacia el exterior. Este contexto requiere de estrategias que fortalezcan el tejido social territorial, la capacidad de protección y resiliencia de las organizaciones frente al contexto adverso. De hecho, existen experiencias que muestran como las organizaciones comunitarias han logrado avanzar hacia estrategias de resiliencia que les permiten sobreponerse a las diversas amenazas; se trata de procesos organizativos para la recuperación de tierras a través de registros comunitarios de propiedad, mecanismos de defensa de comunidades frente a la violencia, alianzas para la generación de información, procesos de transición hacia la agroecología en parcelas familiares y comunitarias y el establecimiento de mercados campesinos. Estos esfuerzos van de la mano del empoderamiento comunitario, cobrando relevancia el liderazgo de las mujeres indígenas.

Las apuestas que se están gestando desde las comunidades y diversos actores locales, aportan lecciones

para una gobernanza inclusiva y sustentable, a pesar de no recibir suficiente apoyo ante el clima adverso que enfrentan. El desafío es cómo fortalecer y ampliar estos esfuerzos, propiciar el diálogo, estimular la reflexión compartida de la problemática, incentivar alianzas e interacciones que permitan acciones más coordinadas y adaptadas a las prioridades del territorio.

Litoral atlántico y Muskitia hondureña

La región nororiental de Honduras se extiende desde el departamento de Cortés hasta Gracias a Dios y está constituida por dos territorios claves: el Litoral Atlántico y la Muskitia, en donde coexisten diversas dinámicas y actores que afectan la gobernanza y los derechos territoriales de sus comunidades.

A lo largo del Litoral se encuentra el pueblo Garífuna, que aglutina 48 comunidades, con una población de 300 mil habitantes, de los cuales un pequeño sector convive en la Muskitia. El reconocimiento de sus derechos territoriales data de 1885 cuando recibieron el primer reconocimiento jurídico, con las titulaciones comunitarias de sus tierras de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, marcando el inicio de defensa de su territorio (Oxfam, 2016), el cual se caracteriza por diversos ecosistemas que han experimentado fuertes procesos de degradación y fragmentación ante la expansión de la palma africana, diversos megaproyectos turísticos y extractivos, además de la presencia de actores ilícitos.

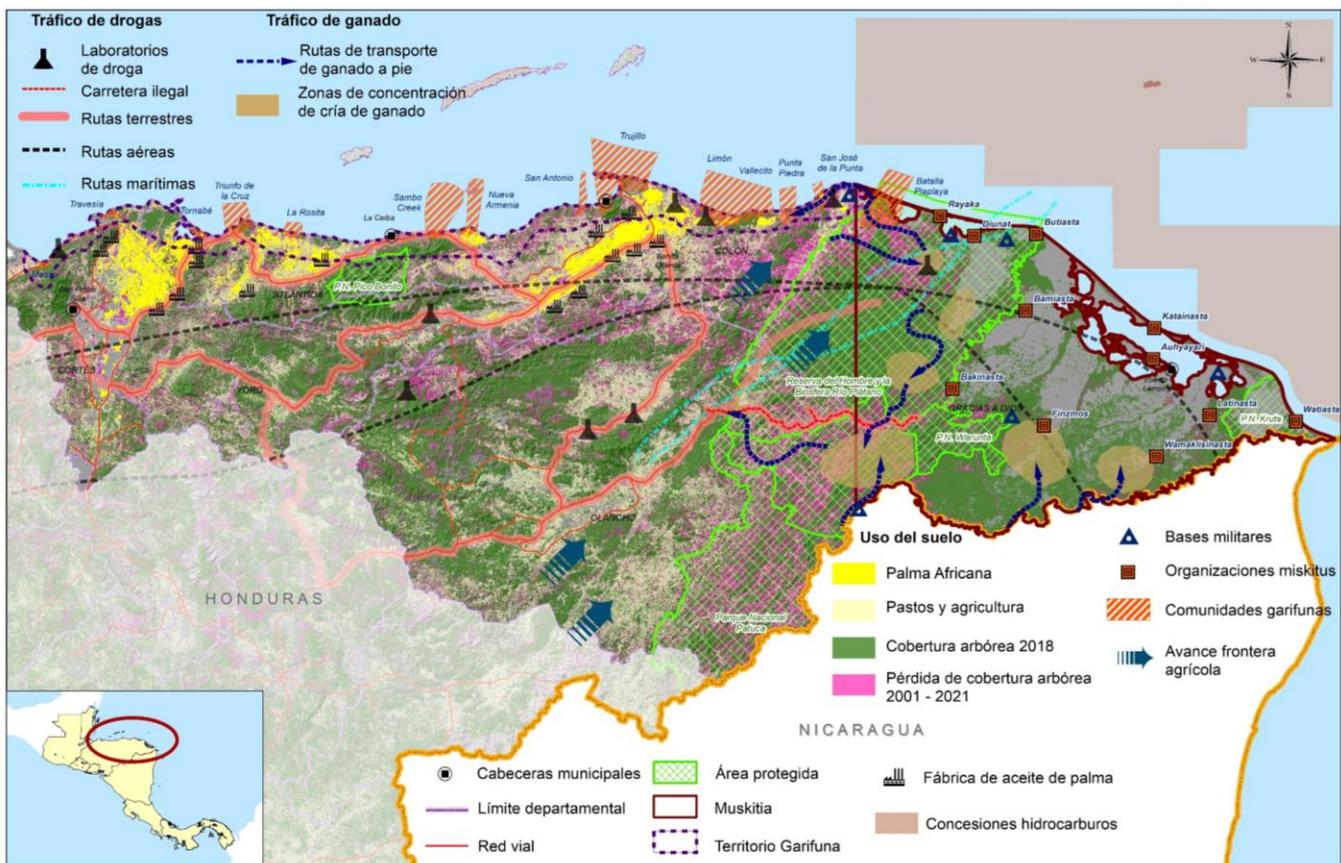
Por su parte, la Muskitia representa cerca del 15% del territorio nacional, posee el área natural protegida más grande del país, la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, hogar de los pueblos Pech, Tawahka, Garífuna y Miskitu (PRISMA, 2021a). Este último representa el 85% de la población y entre los años 2012 y 2016, logró que el Gobierno de Honduras reconociera 12 títulos de propiedad colectiva, que representa un logro para la gestión integral de sus recursos naturales y del territorio. Durante las últimas décadas, estos territorios enfrentan diversas dinámicas de despojo y presiones del poder fáctico (PRISMA, 2017).

Principales dinámicas territoriales

Los pueblos Miskitu y Garífuna han visto incrementar su vulnerabilidad como resultado de las múltiples presiones vinculadas con el acaparamiento y explotación de sus recursos naturales. La renuencia del Estado a implementar sus derechos colectivos ha propiciado la invasión de tierras, que es una de las principales dinámicas que atentan sobre sus medios de vida (PRISMA, 2021). Ambos territorios se han convertido en un corredor estratégico para actividades ilícitas como el narcotráfico, que al mismo tiempo refuerza la expansión de actividades extractivas como el cultivo de palma africana y la narco-ganadería para el lavado de dinero (ver Mapa 4).

Desde los años 1990 los Garífunas se enfrentan a un marco legal³ que promueve la comercialización, acaparamiento e individualización de sus tierras comunitarias ancestrales (Oxfam, 2016). Después del enclave bananero, la palma africana se ha posicionado como un “nuevo enclave” en donde las comunidades luchan por conservar sus tierras y prácticas tradicionales ante los procesos degradantes del cultivo, que ha sido impulsado por el auge en el mercado, la promoción del gobierno como un eje central para el desarrollo (Cuéllar y otros, 2012), y este a su vez es financiado por capital ilícito proveniente del narcotráfico (PRISMA, 2014).

Mapa 4
Dinámicas territoriales en el Litoral Atlántico y la Muskitia hondureña



Fuente: Elaboración propia según Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, accedido a través de Global Forest Watch (2022); InsightCrime (2022); PRISMA (2012); Consejo de Investigaciones del Caribe Centroamericano (CCARC) (2003); Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) (2022)

³ Contra reforma agraria, enmarcada en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, la cual permitió la venta de las tierras y la Ley de Propiedad, en su artículo 100, admitió la posibilidad de finiquitar los títulos comunarios.

La comunidad de Vallecito,⁴ en el departamento de Colón, ha sido un objetivo clave para la expansión de la palma. En 1994 la comunidad se vio afectada por la apropiación de 100 hectáreas de sus tierras ancestrales para el establecimiento del cultivo (Oxfam, 2016; EJAAtlas, 2015). En la actualidad, en el Litoral Atlántico existen unas 190 mil hectáreas de palma,⁵ cerca del 80% se encuentra en territorio garífuna (Mongabay, 2020).

En el 2004, cuando la comunidad de Vallecito recuperó sus 100 ha, nuevamente fueron despojados, pero esta vez por parte de actores ilícitos, que obligaron a la comunidad a abandonar su territorio con el fin de construir una pista de aterrizaje clandestina para el contrabando de drogas (EJAAtlas, 2015). De acuerdo con Oxfam (2016) la construcción de pistas de aterrizaje es una práctica ilegal pero frecuente en el departamento de Colón, uno de los más utilizados para el narcotráfico.

El aumento de los actores ilícitos en Honduras se atribuye particularmente al golpe de Estado de 2009, cuando aprovecharon el contexto de crisis, así como la corrupción e impunidad dentro de las fuerzas de seguridad y la élite del país, para acelerar sus actividades (InSight Crime, 2021a; Cuéllar y otros, 2012). Esta situación agudizó la inseguridad de las comunidades, cuando en el 2014, 20 habitantes de Vallecito fueron amenazados a muerte y raptados durante unas horas por parte de estos actores, que presuntamente intentaban rehabilitar la pista de aterrizaje, que había sido destruida por el ejército unos meses antes (PRISMA, 2014).

La crisis del 2009 también potenció el incremento de despojos y criminalización del pueblo Garífuna, a través de inversiones y el desarrollo de lujosos proyectos turísticos, muchos de ellos acompañados de distorsiones jurídicas (OFRANEH, 2013). Tal es el caso del megaproyecto “Los Micos Beach and Golf Resort”, hoy conocido como Indura Beach and Golf Resort en el departamento de Atlántida. Un informe de Global

Witness (2017) develó que, el Gobierno hondureño, a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), exigía continuamente el desalojo ilegal contra el pueblo Garífuna de Barra Vieja. La ENP formuló una acusación legal de usurpación en contra de los líderes y a otros miembros de la comunidad. Curiosamente, dicho complejo turístico se encuentra en tierras ancestrales amparadas por la Convención Internacional para la Protección de Humedales (Oxfam, 2016).

Esta dinámica de despojos amenaza también a las comunidades en la Bahía de Trujillo, en el departamento de Colón, en donde el desarrollo de megaproyectos turísticos por parte de inversiones canadienses ha exacerbado la usurpación de tierras Garífunas. Como señala MacNeill (2017) tras el golpe del 2009, se tomó con entusiasmo la promoción de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que se ubicaría directamente en la región de Trujillo.

En el 2013, se autorizó la ley orgánica que promovía la creación de la ZEDE. Esta ley permite la subasta de franjas del territorio nacional, incluyendo zonas de la Bahía de Trujillo hasta el Río Sico, donde se ubican 24 comunidades Garífunas. Dichas comunidades se consideran amenazadas ante las posibles disoluciones de sus títulos comunitarios, resultando en el desplazamiento de su pueblo (CIDH, 2021). En abril del 2022, el nuevo gobierno emitió ante el Congreso una medida para la derogación de la ley, la cual suspende su creación, aunque el permiso para las zonas todavía permanece vigente en la Constitución (Los Angeles Times, 2022).

En la Muskitia, a partir de la década de los ochenta, se comenzó a observar el incremento notable de colonos que llegaban al territorio en busca de tierra para cultivos y ganadería (Cuéllar y otros, 2012), situación que se ha incrementado de manera dramática a raíz del narcotráfico.

⁴ Vallecito se sitúa en el municipio de Limón, departamento de Colón. Además de la palma africana, este territorio fue ocupado durante un tiempo por un terrateniente que había construido una pista de aterrizaje para el narcotráfico. Vallecito se encuentra en la frontera de expansión de la palma africana, que se extiende en el Litoral Atlántico hacia la Muskitia.

⁵ Honduras alcanza 190,000 hectáreas de palma africana <https://www.elheraldo.hn/economia/honduras-alcanza-190000-hectareas-de-palma-africana-BNEH1193233>

La presencia de estos actores ilícitos ha tenido enormes impactos sobre los territorios, impulsando la expansión de la ganadería ilegal como otra forma de lavar dinero y de establecer control territorial (Cuéllar y otros, 2012). Los cambios de usos del suelo relacionados con la expansión de la palma en el Litoral Atlántico han generado una migración cada vez mayor de colonos vinculados a la ganadería provenientes de los departamentos de Colón y Olancho, que en muchos casos se han dirigido hacia el oriente de la Mosquitia actuando como testaferros para los narcotraficantes (InSight Crime 2022; PRISMA, 2021).

Estos actores ilícitos, son atraídos por los espacios fronterizos, o por aquellos con cierta abundancia de tierras, como los territorios Indígenas y las áreas protegidas, precisamente porque los regímenes de tenencia de la tierra son débiles coexistiendo con la falta de presencia del Estado (Tellman et al., 2021; Cuéllar y otros, 2012). La cocaína que ingresa a Honduras desde Suramérica atraviesa la Mosquitia, que es donde inicia la ruta terrestre. Este recorrido se desplaza por el resto de los territorios en el Litoral Atlántico hacia Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos. Estos actores se apropian de tierras para crear pistas clandestinas y lucrarse además con la venta de maderas valiosas como la caoba y el cedro, acelerando la pérdida de los bosques (InSight Crime, 2022), que junto con la narco-ganadería⁶ impulsan la conversión de grandes áreas de bosque a pastos (PRISMA, 2017).

De acuerdo con el Instituto de Conservación Forestal (ICF), durante el período 2016-2020 se ha observado la pérdida de 39,000 ha de bosque, relacionadas con la ganadería ilegal (Mongabay, 2021a). Si bien, no se conocen cifras oficiales de cuánto es la cantidad de ganado dentro de la Reserva, datos de InSight Crime (2022) estiman que se estarían criando alrededor de 65,000 reses. Ese mismo informe devela que el ganado que ingresa a la Reserva es traído desde los departamentos de Colón y Olancho o desde Nicaragua, cruzando el Río Coco que divide a la Reserva de Río Plá-

tano de la Biósfera de BOSAWAS en ese país. Los colonos abren caminos de manera ilegal o emplean a personas nativas para que arreen a los animales por la selva en trayectos que pueden durar hasta 15 días. Posteriormente el ganado se envía de vuelta a Olancho y Colón, en donde una parte es sacrificada y empaquetada para el mercado local, y la otra ingresa en una ruta de contrabando (otra forma de lavado de dinero) que llega hasta Guatemala y posteriormente a México⁷ (InSight Crime, 2022).

Junto con la narco-ganadería, otra dinámica que preocupa a los ecosistemas de la Mosquitia y sus pueblos es la construcción de una “narco-carretera”. De acuerdo con estudios recientes, la carretera atraviesa directamente la zona de amortiguamiento de la Reserva del Río Plátano, conectando los municipios de Dulce Nombre de Culmí en Olancho y con Wampusirpi en Gracias a Dios, desplegando así un conducto para los actores ilícitos, para traficar drogas, madera y ganado (InSight Crime, 2021b; Mongabay, 2021b). La construcción de la carretera inició en el 2008 pero con la pandemia de COVID-19 se aceleró, deforestando cerca de 30 mil ha de bosque en los últimos tres años (El Herald, 2022a; Mongabay, 2021b). Además, se presume que, quienes financian la carretera son empresarios y políticos vinculados con traficantes de drogas e intereses de grandes ganaderos del departamento de Olancho (Mongabay, 2021b).

Para asegurar el despliegue de estas actividades, los actores ilícitos recurren a la violencia con el objetivo de controlar los territorios para proteger sus intereses. Los niveles de violencia dependen de la relación entre estos actores y el Estado. Como señala Blume (2022) en Honduras los narcotraficantes utilizan la cooptación como estrategia, debido a la corrupción generalizada, pues deben pagar a numerosos actores para asegurar su ruta ilícita, dado que, el aparato de seguridad es más fragmentado. En consecuencia, la cooptación genera mayores niveles de violencia.

⁶ La relación entre la ganadería y el narcotráfico es tan íntima, que las comunidades denominan a este fenómeno como “narco-ganadería”.

⁷ De acuerdo con InSight Crime la compra y venta de ganado se realiza mayoritariamente en efectivo, involucrando a varios intermediarios y los controles de las autoridades llegan a ser insuficientes para rastrear el verdadero origen del ganado. De esta manera, los actores criminales pueden inyectar dinero de origen ilícito a la industria con la compra de ganado e insumos para la producción y obtener ganancias legales mediante la venta.

El Estado, en respuesta a estas actividades ilícitas, aprobó en 2010 un despliegue militar agresivo, permitiendo al ejército un mayor papel para frenar dichas actividades. Durante esa época, se desplegaron 2,000 soldados en la Costa Atlántica (Cuéllar y otros, 2012). Situación que no difiere de la actualidad: de acuerdo con El Heraldó (2022b), tras develarse los impactos de la narco-carretera, en abril del 2022, el nuevo gobierno anunció el despliegue de 2,000 soldados para “resguardar y conservar la Reserva del Río Plátano y otras áreas naturales”.

La lucha contra estas actividades ilícitas ha generado la normalización de la militarización dentro de los territorios Miskitu y Garífuna. Esto, lejos de resolver el problema del tráfico de drogas, facilita la vigilancia estatal de estos pueblos, reprimiendo sus liderazgos y aumentando su potencial de criminalización (Blume, Sauls y Knight, 2022; Cuéllar y otros, 2012). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su profunda preocupación por los reportes de actos violentos del ejército contra estas comunidades. De acuerdo con Global Witness (2020b), Honduras se mantiene en la lista de los países más peligrosos para la defensa del medio ambiente, con la mayor tasa de asesinatos, en contra de personas que resisten y defienden sus territorios.

Implicaciones para la gobernanza

La diversidad de dinámicas y actores ilícitos a lo largo del Litoral Atlántico y la Muskitia socavan los procesos de gobernanza territorial de estos pueblos, a pesar de contar con el reconocimiento de sus derechos territoriales. La ausente voluntad del Estado para implementar los derechos y frenar las invasiones están profundizando también la vulnerabilidad climática y limitan las posibilidades de construcción de resiliencia.

Aunque el Estado promovió la titulación de estos territorios, paralelamente ha impulsado iniciativas que promueven la invasión y acaparamiento de tierras. Blume (2022) señala, que esto ha permitido a las corporaciones y a los actores ilícitos involucrarse en la apropiación de los territorios sin ninguna repercusión. La corrupción desenfrenada aumenta las oportunidades de los narcotraficantes para influenciar a

las autoridades municipales, a través de la cooptación. Por ejemplo, en la Muskitia la invasión de tierras ha sido apoyada por el accionar de los gobiernos locales y sus alcaldes quienes han facilitado la venta ilegal de tierras, para asentar invasores y promover la apertura de la carretera ilegal (PRISMA, 2021). Esto, ha generado conflictos entre las autoridades municipales y las autoridades territoriales por la gobernanza de los recursos, en donde ambas afirman ser la autoridad legítima. Esta situación, ha creado condiciones para que actores ilícitos financien estructuras de gobernanzas paralelas a fin de socavar a las existentes y que perciben como hostil, para luego afirmar que su estructura es la legítima (Blume et al., 2022).

Adicional a este conjunto de interacciones, los procesos de gobernanza se ven limitados por el despliegue de la militarización, que no se corresponde con las prioridades de las comunidades que luchan contra estas invasiones. En consecuencia, los pueblos acuden a diversas estrategias ante el desplazamiento y vaciamiento de sus comunidades, mediante la migración forzada, particularmente en el Litoral Atlántico.

Por otra parte, existen casos que muestran acciones comunitarias en defensa de sus derechos de forma pacífica, abierta y directa. En Vallecito, las comunidades Garífunas implementaron estrategias que condujeron a la recuperación exitosa de sus tierras, que han sido altamente apetecidas por el crimen organizado (PRISMA, 2014). Además, en este territorio se gesta una propuesta de autonomía basada en la soberanía alimentaria ancestral, con la producción de coco para la dieta de las comunidades y para el procesamiento de aceite de coco. Asimismo, hay una apuesta por los saberes ancestrales de medicina natural como respuesta al manejo de COVID-19, a través de las Casas de Salud Ancestral.

Los derechos colectivos han sido claves para la construcción de alternativas desde las comunidades. Sin embargo, la ausencia de voluntad política de parte del Estado para implementar estos derechos y enfrentar las diversas dinámicas excluyentes y violentas, sigue faltando en la práctica. Para defender sus derechos, los pueblos y comunidades requieren fortalecer

y crear nuevas estrategias y alianzas para el futuro de sus territorios.

Ahuachapán, El Salvador

El departamento de Ahuachapán se encuentra en la zona occidental de El Salvador. Limita al oeste-noroeste con Guatemala, al noreste con el departamento de Santa Ana, al sureste con el departamento de Sonsonate y al sur con el océano pacífico.

Este se encuentra subdividido en 12 municipios: Apaneca, Atiquizaya, Concepción de Ataco, El Refugio, Guaymango, San Lorenzo, San Francisco Menéndez, San Pedro Puxtla, Tacuba y Turín. Cada municipio es gobernado por un alcalde y su consejo municipal plural, con representación de diversos partidos políticos.

En la actualidad, la economía de Ahuachapán continúa estando fuertemente vinculada a su sector agrícola, un rasgo que históricamente ha caracterizado al departamento. Por mucho tiempo fue el café el producto que definió su economía y proveyó de empleo a una porción significativa de sus habitantes. Sin embargo, a raíz de la crisis prolongada que este cultivo atraviesa desde hace décadas, el sector agrícola se ha visto en la necesidad de diversificarse. Hoy en día es la caña de azúcar el cultivo de exportación que se posiciona entre los grandes productores. La ganadería, así como la producción de granos básicos y de hortalizas también han llenado el vacío que la producción cafetalera ha dejado en la economía del departamento, principalmente entre los productores pequeños y medianos.

Sin embargo, el peso del sector agrícola ha ido disminuyendo en las últimas décadas en favor del sector servicios; consecuente con los cambios impulsados desde el gobierno central a nivel nacional desde la década de los noventa.

Esta transformación también se ha visto reflejada en su población. Tradicionalmente rural, en los últimos años la población urbana ha aumentado significativamente; siendo 2007 el primer año en el que el departamento vio una disminución de habitantes en las

zonas rurales, mientras que en los habitantes de zonas urbanas se duplicaron.

Paradójicamente, esa dependencia de la agricultura y del territorio rural no se ha traducido en una mejora de la seguridad alimentaria de sus pobladores. Ahuachapán consistentemente se posiciona en los primeros puestos de los departamentos con mayor incidencia del retardo de peso y talla entre sus niños (CONASAN, 2016). De igual forma, en el 2011 casi el 50% de los adultos padecían una enfermedad crónica no transmisible (sobrepeso/obesidad, dislipidemia, hipertensión, diabetes, etc.) (Romero, 2011), enfermedades estrechamente vinculadas con la calidad de la alimentación.

Estas cifras también resultan paradójicas cuando se contrastan con la abundancia natural de la que goza el departamento. Desde su planicie costera que contiene el complejo Barra de Santiago, segundo bosque salado en importancia del país, hasta las tierras fértiles de la meseta central occidental al norte, donde se encuentra la cabecera departamental; pasando por las alturas del sistema formado por la Sierra de Tacuba y la cordillera Apaneca-Ilamatepec, emplazamiento del Parque Nacional El Imposible (PNEI), bosque protegido más importante del país. Estos diversos ecosistemas son hogar de una gran diversidad de flora y fauna, y en su conjunto complementan los medios de vida de los habitantes del departamento mediante actividades turísticas, de pesca, etc.

No obstante, esa variedad altitudinal también divide el departamento en dos regiones escasamente interconectadas, lo que ha dificultado los intercambios intradepartamentales y el desarrollo más equitativo del territorio. Mientras que al norte la cabecera departamental monopoliza los procesos de desarrollo, que a su vez se alimentan de los intercambios con la ciudad de Santa Ana en el departamento homónimo vecino; al sur es la carretera del Litoral el eje que articula los municipios costeros con la frontera de La Hachadura al oeste y el departamento de Sonsonate al este.

Otro reto importante para el departamento es el del cambio climático, particularmente sensible para un territorio de vocación agrícola. De esta forma, sequías prolongadas o, igualmente, prolongadas lluvias

–vinculadas con el recrudecimiento de fenómenos como La Niña y El Niño– amenazan con la destrucción de los medios de vida de miles de personas. Los cultivos de exportación también se ven amenazados: con el aumento de la temperatura, las superficies en las zonas altas ocupadas por el parque cafetalero se reducen, y estos son más propensos a plagas (Gay et al., 2006).

Principales dinámicas territoriales

Esa relación compleja que el departamento tiene con sus recursos ha resultado en diversas dinámicas de conflicto y presión sobre los mismos. El declive del sector cafetalero y la necesidad de diversificación productiva ha colocado una mayor presión en la tierra, cuyo acceso continúa viéndose limitado. Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador (DIGESTYC), mientras que en 2007 eran más los productores quienes accedían a la tierra como propietarios que quienes arrendaban, en 2017 el número de arrendatarios casi se había triplicado, reduciéndose ligeramente la cantidad de propietarios.

Además de los grandes terratenientes y los medianos y pequeños productores locales, a la competencia por la tierra se suman nuevos actores como las empresas de bienes raíces, que han visto en el departamento oportunidad para expandir sus negocios enganchándose a las dinámicas de desarrollo existentes. Así, en

el norte, cada vez son más los proyectos habitacionales que se implantan en tierra previamente agrícolas, dirigidos a la población urbana que desborda las ciudades de la zona.

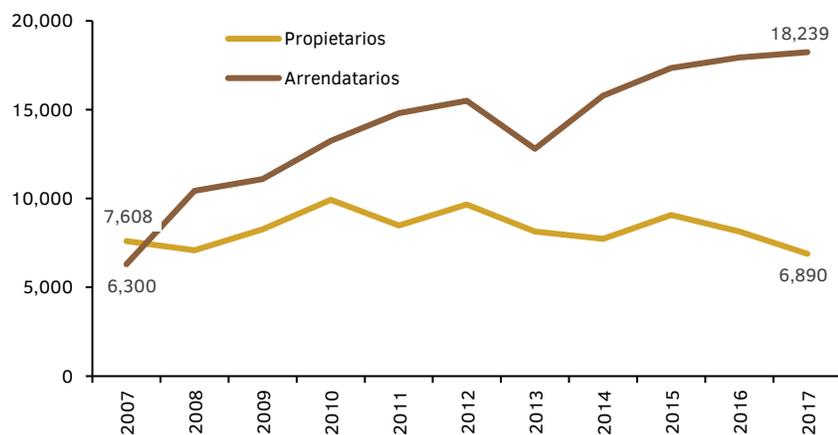
Estos actores también se suman a la competencia por los recursos hídricos en el territorio. Los grandes productores –principalmente de caña de azúcar– excavan pozos y construyen diques en los ríos –en ocasiones de forma irregular– para regar los cultivos de exportación durante todo el año, mientras las comunidades locales luchan por disponer de agua para sus parcelas de subsistencia y sus actividades cotidianas. Adicionalmente, los desarrollos inmobiliarios llegan a disputar el agua para sus proyectos residenciales. Estos conflictos han llegado a escalar de forma tal que líderes comunitarios que protestan en contra del uso indiscriminado del agua han sido aprehendidos y procesados judicialmente por autoridades gubernamentales que se decantan en favor de los desarrollos inmobiliarios.

Este conflicto además impacta directamente la ecología de la zona, ya que los bosques de manglares dependen directamente del agua dulce que llega a la costa a través de los ríos, que mantienen la salinidad en un delicado nivel de equilibrio que les permite vivir. Si el agua dulce disminuye, el aumento de la salinidad vuelve inhabitables las aguas de los canales para las especies de manglares que sostienen el ecosistema.

Esta situación también repercute directamente en los medios de vida de las comunidades costeras, quienes hacen de la pesca y del turismo actividades complementarias a sus ingresos familiares.

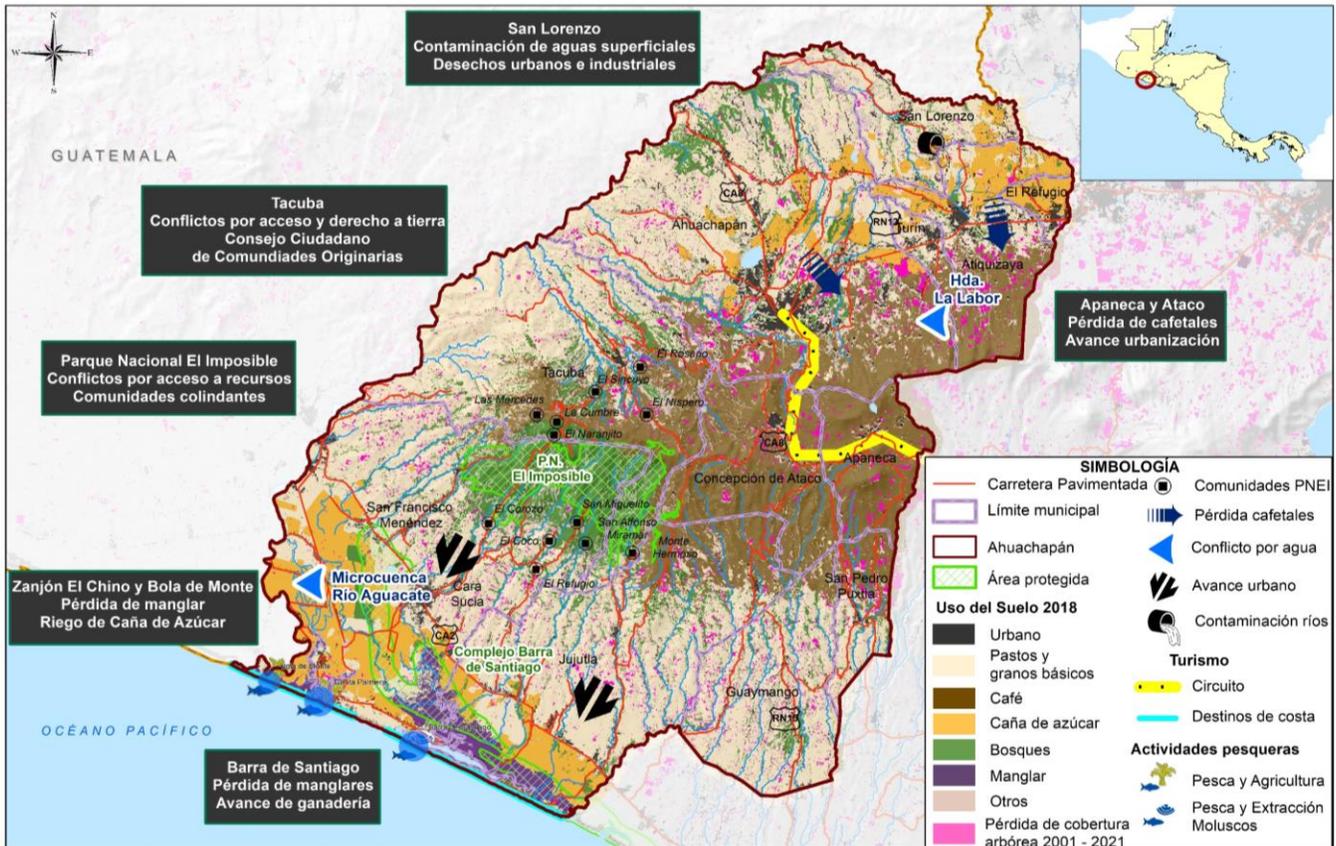
Otra área en la que se dan conflictos por el acceso a recursos son los alrededores del PNEI. En ella, las comunidades colindantes se encuentran en una situación de confusión sobre las normas que aplican para el aprovechamiento de recursos forestales, así como sobre el uso de la tierra con fines productivos. Aún está fresco en la memoria de los vecinos la época en la que se decretó una estricta zona de

Gráfico 4
Ahuachapán: Productores agropecuarios propietarios y arrendatarios, 2007-2017



Fuente: Elaborado en base a datos de DIGESTYC

Mapa 5
Dinámicas territoriales en Ahuachapán, El Salvador



Fuente: Elaboración propia según CRS 2018; Global Human Settlement Layer (GHSL), 2022; Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, accedido a través de Global Forest Watch (2022); Secretaría de la Presidencia (2012)

veda alrededor del parque en la que se prohibía todo tipo de actividad que amenazase la cobertura arbórea. Sin embargo, a pesar de que esa medida ha caducado, qué actividades pueden hacer es aún incierto. Ello también ha tenido implicaciones en los esfuerzos de conservación impulsados por actores externos interesados en la reforestación. Al no tener claridad de si se puede o no aprovechar los recursos maderables en la zona de amortiguamiento, las comunidades prefieren no involucrarse en proyectos con especies que no sean frutales, ya que ello termina reduciendo sus áreas de cultivo y no pueden aprovechar la madera.

Ahuachapán tampoco ha sido ajeno a la pandemia por COVID-19 que ha azotado al mundo en los últimos años. Las estrictas medidas de cuarentena adoptadas en los primeros meses de la emergencia sanitaria en el país significaron suspender de forma abrupta

y absoluta los flujos turísticos que optaban por la zona marino-costera o por la zona alta del departamento. De igual forma, los pescadores se vieron imposibilitado salir de sus comunidades para comercializar los productos marinos.

Implicaciones para la gobernanza

Frente a estas disputas por los medios de vida, diferentes respuestas que apuestan por la gobernanza se articulan en diversos mecanismos de diálogo o coaliciones a diversas escalas. En el municipio de Tacuba, las comunidades indígenas se han organizado para trabajar en la defensa de sus medios de vida, además de promover la defensa de su identidad y cultura. Gracias al trabajo de incidencia organizada que realizan, han logrado establecer un acuerdo con la Alcaldía Municipal según el cual esta adquirirá tierras y las

entregará a las comunidades en comodato para que estas puedan trabajarlas de forma colectiva de acuerdo con sus usos y costumbres. A pesar de ese logro alcanzado a través de la organización, no deja de resultar alarmante la situación de despojo a la que los pueblos originarios han sido relegados.

También resulta emblemático el trabajo por la defensa del agua realizado en la zona sur del departamento, en particular en la cuenca del río Aguacate. Diversas comunidades se articularon en torno a la problemática de la sobre explotación de este caudal por parte de los grandes productores de caña de azúcar, uso que pone en peligro sus propios medios de vida. Hoy en día han extendido su trabajo a más áreas de la gestión ambiental: además de tener un acuerdo de comanejo de manglares, apuestan por la creación y el fortalecimiento de espacios para la juventud, con énfasis en la educación ambiental y la defensa de los recursos naturales.

Estos procesos de gobernanza en defensa de los medios de vida también son apoyados por actores institucionales de la sociedad civil de dentro y fuera del departamento. Algunas iniciativas apuestan por la restauración de los paisajes agrícolas de Ahuachapán, con la gobernanza como eje transversal. Articulando a productores, centros de investigación, asociaciones de desarrollo comunitario, juntas de agua, etc., se busca crear una red que sea capaz de escalar y sostener en el tiempo los cambios impulsados —buenas prácticas agrícolas, resiliencia climática, agroecología, inclusión de jóvenes y mujeres en la agricultura, etc.— y que estos se traduzcan en un desarrollo de calidad para las comunidades y los territorios rurales.

Otras propuestas promueven la apertura de espacios de diálogo y acción en torno al bienestar definido por las personas mismas del territorio. El concepto de bienestar que ha resultado de dichos espacios —o coaliciones— tiene en su centro la seguridad alimentaria y los medios de vida. De las tres coaliciones conformadas, las dos con mayor éxito llegaron a formular una propuesta de Unidad Técnico-Agropecuaria Municipal que asistiese a los productores de sus municipios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los últimos años ha habido un viraje en las prioridades desde las políticas públicas relativas a la protección del medio ambiente, la producción agrícola, el desarrollo de infraestructura, etc. Y a pesar de cierta apertura desde los niveles técnicos de instancias gubernamentales, no resulta claro que estas propuestas de gobernanza local vayan a tener eco y respaldo en niveles superiores de la institucionalidad pública entre los tomadores de decisiones. Incluso en los casos donde alcaldes y consejos municipales se han mostrado receptivos, la situación actual de escaso financiamiento a los gobiernos locales pone severas restricciones al apoyo que pueden ofrecer. Esta desconexión entre políticas públicas e iniciativas territoriales aumenta el riesgo de la duplicación de esfuerzos, desarticulación y finalmente el abandono de espacios.

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN)

La RACCN representa el 28% del territorio nacional y el 32% de la cobertura arbórea del país (GFW, 2022). La mayor parte de estos bosques se sitúan dentro de territorios que han sido reconocidos como propiedad de pueblos indígenas Miskitu, Sumu-Mayagna y Rama y de las comunidades étnicas Creoles y Garífunas (PRISMA, 2014). Históricamente, este territorio ha funcionado como válvula de escape ante las crisis de la actividad agroexportadora, considerada el motor de la economía del país, que se concentra en la zona del Pacífico caracterizada por la falta de acceso a tierras de su población campesina.

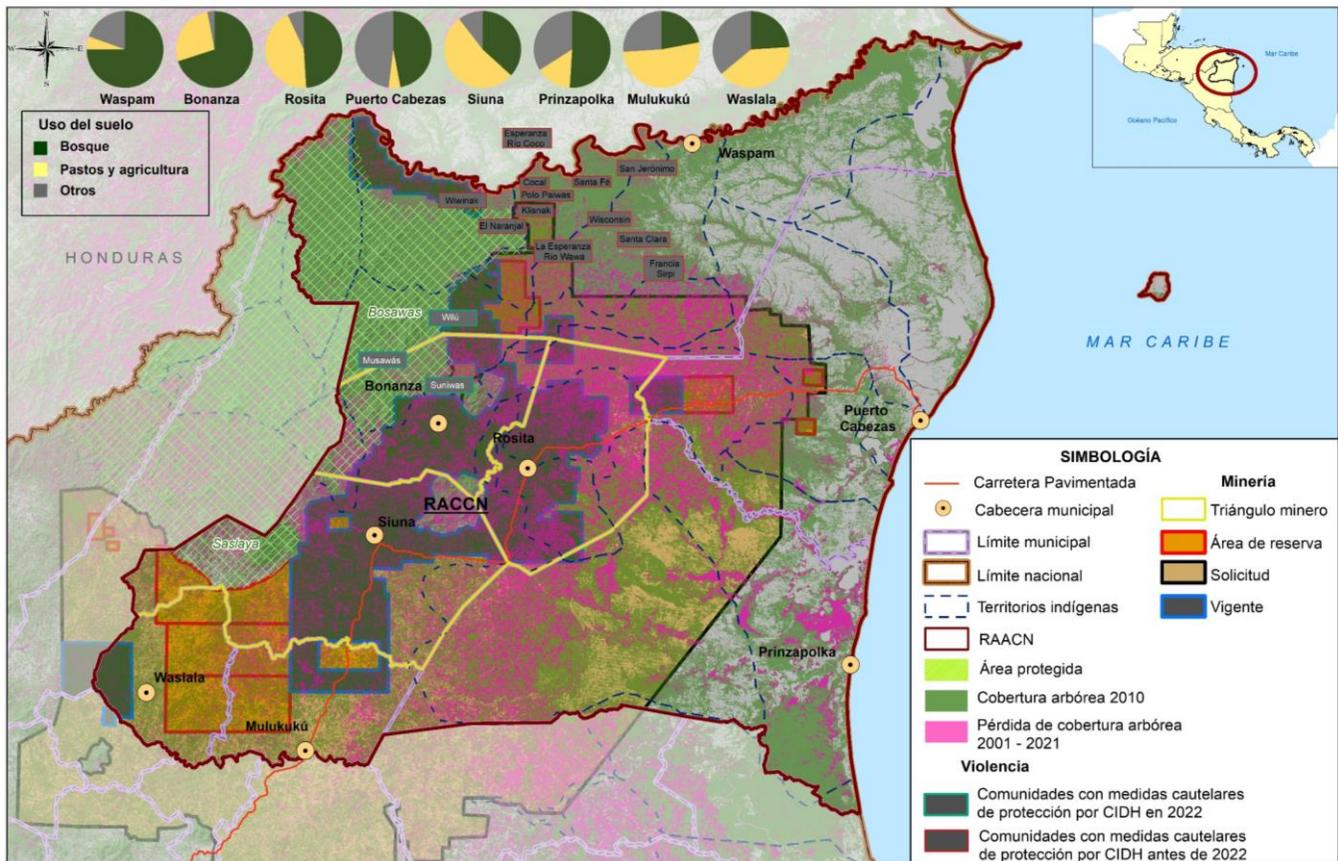
La RACCN se caracteriza por ser un territorio sometido a fuertes presiones por parte de actores externos que han configurado dinámicas de corte extractivista y degradante de los recursos naturales. Estas presiones coexisten con el avance acelerado de la frontera agrícola y ganadera, y con invasiones por parte de colonos y mestizos que constituyen serias amenazas para los pueblos indígenas, generando un clima de inseguridad y violencia.

El acaparamiento de tierras es una de las causas del incremento de la violencia en la RACCN, a tal grado que junto a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) lideran las tasas de homicidios más altas del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)⁸ le ha solicitado al Gobierno de Nicaragua la debida protección a comunidades indígenas y afrodescendientes que siguen enfrentando una situación de violencia generalizada por las invasiones por parte de colonos y terceros en sus territorios ancestrales, quienes actuarían con la aquiescencia y tolerancia del Estado y el incentivo del sector privado (CIDH, 2021) (ver Mapa 6).

Principales dinámicas territoriales

El optimismo generado por la Ley 445 del Régimen de Propiedad de los Pueblos Indígenas, que regula la propiedad comunal en la Costa Caribe,⁹ se ha ido desvaneciendo debido a la ineficacia en implementar los derechos de tenencia. La dinámica de invasión de tierras y la violencia imperante que enfrentan las comunidades es el principal obstáculo. Pese a que la Ley sostiene que los derechos históricos de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes prevalecen sobre otros títulos otorgados a favor de terceros, la fase de saneamiento o limpieza de pobladores ajenos

Mapa 6
Dinámicas territoriales en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua



Fuente: Elaboración propia según Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, accedido a través de Global Forest Watch (2022); INETER (2022) y MEM (2021)

⁸ Desde 2015 la CIDH ha otorgado medidas cautelares de protección a 15 comunidades indígenas pertenecientes a la RACCS. El 13 de febrero del 2022 otorgó dichas medidas a tres comunidades del territorio Mayagna Sauni As (CEJIL, 2022).

⁹ Desde 2007 se han titulado más de 16 territorios indígenas en la RACCN que representan una extensión de más de 2.4 millones de hectáreas (CONADETI, 2013).

al territorio, así como de corporaciones que usan los territorios sin un título legal o un contrato de arrendamiento con la comunidad, no ha podido llevarse a cabo.

El Gobierno central lejos de brindar la protección debida a las comunidades locales en la RACCN, ha incentivado el flujo constante de colonos e industrias extractivas, amenazando los derechos a las tierras comunales y el régimen de autonomía, exacerbándose en los últimos años con el aumento de asesinatos y secuestros (The Oakland Institute, 2020). Desde la última década del siglo pasado hasta la actualidad, los diferentes gobiernos de Nicaragua han trabajado incesantemente por convertir al país en un lugar atractivo para las inversiones, de tal manera que múltiples compañías internacionales y transnacionales se han instalado en la RACCN, principalmente en rubros como la minería, el sector forestal y la ganadería.

En 2020, Nicaragua exportó 828 millones de dólares en oro, convirtiéndose en su principal producto de exportación (OEC, 2022). En 2017, la Asamblea aprobó la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense ENIMINAS, que permitía la participación del Estado en el negocio minero. Dentro del primer mes de la nueva ley, la superficie total del país bajo concesión minera aumentó de aproximadamente 1,200,000 hectáreas (ha) a 2,600,000 ha (una superficie más grande que el tamaño de El Salvador), colocando más del 20% de la tierra de Nicaragua bajo concesiones mineras. Aproximadamente 853,800 ha de esta tierra están en la zona de amortiguamiento de la Reserva BOSAWAS (The Oakland Institute, 2020).

En la RACCN, la extracción de oro es de larga data, coexistiendo la minería industrial con la extracción artesanal, su mayor concentración está en el denominado Triángulo Minero, el yacimiento de oro más importante del país, que se localiza en los municipios de Bonanza, Siuna y Rosita. Este territorio se caracteriza por altos niveles de pobreza, problemas sociales y una intensa degradación de los recursos naturales.

El crecimiento del sector minero se ha venido gestando debido al debilitamiento del marco legal am-

biental y a la violación de los derechos de las poblaciones vulnerables (Centro Humboldt, 2019), lo que permite a las empresas evadir la responsabilidad por el acaparamiento de tierras y el daño resultante a las comunidades indígenas. La ocupación de los territorios y la explotación del oro por parte de los colonos han transformado la economía comunitaria. Los pueblos indígenas han perdido el control de la tierra como medio de producción y generación de ingresos, viéndose obligados a abandonar sus hogares y profundizando sus condiciones de pobreza.

Un conjunto de empresas transnacionales ha tomado el control de las concesiones mineras del país. Entre ellos se encuentran Caliber Mining Corp., B2Gold Corp, Royal Road Minerals y Golden Reign Resources, Oro Verde de Australia, Condor Gold del Reino Unido y HEMCO Nicaragua S.A. de Colombia.

Según Global Forest Watch (2022) la RACCN es el territorio con mayor cobertura arbórea del país. Cuenta con 2.42 millones de ha, constituyendo el sustento y medio de vida para las familias indígenas que habitan la región (Camino, 2018; Cuéllar y otros, 2012). En el período 2001-2021, la RACCN ha perdido aproximadamente 650 mil ha, lo que equivale a una disminución del 27% de su cobertura arbórea. Los principales motores de la pérdida de bosque son las concesiones para el aprovechamiento forestal y el auge ganadero, generando una fuente de conflictos por el uso del suelo y otros recursos naturales.

En el sector forestal, PRONicaragua, la agencia estatal de promoción de inversiones y exportaciones ha realizado una fuerte campaña de incentivos fiscales, ofreciendo más de 3.9 millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales como teca y caoba; y no maderables como el hule y cacao, entre otras. Los planes del sector privado consisten en llegar a una masa crítica de 120 mil ha, por lo que las oportunidades de inversión en el sector son amplias y el respaldo del Gobierno para este tipo de iniciativas es evidente (PRONicaragua, 2022).

La inversión de proyectos forestales en la RACCN se presenta en diversas modalidades, algunos tienen que ver con proyectos como la expansión de las plantaciones de teca y cacao, llevados a cabo por compañías

como MLR Forestal y Norsteak Maderas, ambas asociadas a HEMCO.¹⁰ Entre ambas compañías, HEMCO maneja 11,700 hectáreas de tierras en los municipios de Siuna y Bonanza. Por otro lado, los daños ocasionados al ecosistema forestal por el Huracán Félix en la RACCS,¹¹ dieron pie al surgimiento de otras compañías como MAPIINICSA y Alba Forestal para el aprovechamiento de la madera tumbada. En ambos casos se prometieron beneficios a los habitantes, además de generar cierta infraestructura como caminos de acceso, sin embargo, los resultados fueron negativos para las comunidades, ya que finalmente dichos proyectos terminaron en mayor tala de bosques y un mejor acceso para nuevos actores y actividades de extracción.

Nicaragua es el principal exportador de carne de Centroamérica. Sus exportaciones aumentaron del 60% de la producción total en el año 2006 a más del 95% en 2019, una proporción mayor que cualquier otro país, siendo su principal destino Estados Unidos, aunque otros países latinoamericanos también importan productos de carne y leche de Nicaragua (OEC, 2022). Las regiones autónomas contienen la mayor concentración de la ganadería. Según el Instituto Internacional de Investigación Ganadera (ILRI), la RACCN, RACCS y el Departamento de Río San Juan (adyacente a RACCS) producen el 46% de toda la leche y carne nicaragüense (The Oakland Institute, 2020).

La rápida expansión de la ganadería está deforestando la RACCN, particularmente en la Reserva de BOSAWAS, que entre los años 2015 y 2019 perdió cerca de 35,000 hectáreas de bosque para la plantación de pasto (InSight Crime, 2022). Una explotación ganadera de bajos rendimientos, que basa su beneficio en la incorporación de nuevas áreas resulta devastador para el área protegida, pues la ganadería se usa como fachada para el tráfico de tierras, los colonos que migran desde el centro del país en busca de tierras

recurren a las redes de tráfico de tierras que usurpan el territorio en donde solo los pueblos indígenas tienen derechos reconocidos (InSight Crime, 2022).

La lógica de la ganadería expansiva en BOSAWAS, al igual que en Honduras en la Reserva del Río Plátano, es alimentar la ruta de contrabando de ganado de Centroamérica a México. De acuerdo con estimaciones recientes de InSight Crime (2022), cerca de 370,000 reses son criadas en BOSAWAS. Una vez el ganado está listo para la venta, se traslada de la reserva a pie y luego se introduce en camiones que se dirigen a las casas de sacrificio cerca de Managua. Otra parte del ganado se transporta a pie, cruzando el río Coco hacia la reserva del Río Plátano, volviéndose parte de estrategias para el lavado de dinero del narcotráfico y como fachada para ocultar pistas de aterrizaje clandestinas.

Si bien BOSAWAS es el principal objetivo de los traficantes de tierra para la expansión de la ganadería ilegal, esta actividad también tiene una fuerte vinculación con el comercio ilegal de madera. Como señala InSight Crime (2014), la ubicación de BOSAWAS en el extremo de la RACCN y cerca de la frontera con Honduras, la vuelve particularmente vulnerable a este tipo de actividad. El crimen organizado en Honduras ha aumentado su participación en el comercio, desplazando algunos de sus grupos armados hacia Nicaragua para talar madera preciosa. Asimismo, la RACCN se ha convertido en un importante punto de transbordo de la droga proveniente de Suramérica. Los grupos criminales locales, tanto en la RACCN como en la RACCS, aprovechan las lanchas rápidas que mueven cargamentos de droga a través de la costa del Caribe, ofreciendo una variedad de servicios a los traficantes, incluyendo reabastecimiento, mantenimiento, almacenamiento e inteligencia (InSight Crime, 2013).

¹⁰ La empresa HEMCO tiene inversiones mineras, además ejecuta proyectos agroforestales con un fuerte componente de conservación, ampliación de corredores biológicos y captura de carbono. En materia social, los proyectos plantean beneficios para las comunidades tales como educación, infraestructura productiva y caminos. MLR Forestal ha recibido financiamiento del FinnFund y Netherlands Development Finance Company por valor de US\$10 millones respectivamente.

¹¹ Según la evaluación de daños al ecosistema forestal ocasionados por el Huracán Félix, de octubre 2007, en la RAAN fueron afectadas 1,166,579 ha, y se identificó como área de alta afectación una superficie de 512,165 ha, de las cuales se afectó de forma directa 951 ha de bosque de pinares y 509,813 ha de bosque latifoliado (Kreimann, 2010).

Los traficantes de droga implementan diversas estrategias para llevar a cabo sus actividades ilícitas en Centroamérica, dependiendo directamente de las relaciones que se establezcan con el tipo de Estado que impera en cada país. En el caso de las Regiones Autónomas, grupos de organización criminal implementan estrategias de colusión ocasionando menores niveles de violencia, a diferencia de Honduras, donde los narcotraficantes prácticamente negocian a través de la cooptación y la violencia para controlar el territorio (Blume, 2022).

Implicaciones para la gobernanza

La RACCN se encuentra inmersa en una dinámica de degradación de sus recursos, perdiendo grandes extensiones de bosque, afectando gravemente la biodiversidad y los medios de vida de sus habitantes. Las comunidades indígenas y afrodescendientes reaccionan ante tal situación, ejecutando diversas estrategias y acciones: prácticas sostenibles de producción, planes de ordenamiento territorial, así como también brigadas de control y vigilancia, fruto de su cosmovisión e instituciones tradicionales. Sin embargo, su accionar se enfrenta sistemáticamente con una serie de obstáculos para una adecuada gobernanza de sus propios territorios (PRISMA, 2015).

A pesar de los avances del país en materia de institucionalización del régimen autonómico y el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de los pueblos nativos sobre la tierra, el proceso de demarcación y titulación se encuentra plagado de contradicciones y no marcha con la agilidad esperada, principalmente en la etapa de saneamiento, que incluye la remoción de colonos e industrias externas de sus tierras. Una de las razones, se puede encontrar en el origen del proceso autonómico, que se remonta a los años 1980 cuando la región del caribe nicaragüense experimentó una creciente insurgencia indígena. Con el establecimiento de las regiones autónomas, se establecieron nuevos límites político-administrativos en el caribe nicaragüense, pero se mantuvieron otros, como la división municipal. En ese sentido, el proceso de autonomía también asumió formas administrativas regionales no indígenas que se conjugaron con las instituciones formales electorales, y con ello, las lógicas clientelistas que caracterizan las dinámicas de los

partidos políticos. En el fondo, los intereses personales y de partido han sesgado y socavado la constitución de los gobiernos territoriales indígenas (GTI) y la gobernanza del territorio en general (Baracco, 2018; Larson y Soto, 2012).

Tanto la Ley 28 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica como la Ley 445, así como también las exigencias de organismos multilaterales como el Banco Mundial y la Cooperación Internacional son claros ejemplos de la problemática que genera en la RACCN, adaptar esquemas o prácticas más ajustadas a estados modernos que a las instituciones comunales indígenas. Procedimientos administrativos con lógicas de mercado pueden inculcar valores alejados de la cosmovisión de estos pueblos, donde la asistencia mutua y la reciprocidad son sus principales rasgos.

Por otro lado, al interior de los GTI existen carencias de conocimiento y capacidades de tipo técnico. Existe poca claridad en cuanto a las funciones de las autoridades territoriales y su articulación con otras entidades administrativas como las alcaldías de los municipios, el ejército o dependencias a nivel del ejecutivo como el Ministerio del Ambiente en la gestión de la reserva de la biosfera de BOSAWAS.

En el plano económico, el proceso autonómico excluye el tema de la extracción de recursos, rol que asume el Gobierno Central, bajo el cual se ha implementado una estrategia de incorporación del territorio a la globalización, favoreciendo actores externos al territorio a través de incentivos y concesiones al sector privado y a la inversión extranjera directa.

Guanacaste, Costa Rica

La provincia de Guanacaste se ubica en el noroeste de Costa Rica y corresponde a la denominada Región Chorotega dentro del marco de planificación del país. Administrativamente está subdividida en 11 cantones (municipios). Se trata de una región extensa de 10,140.71 km², representando un 20% del territorio costarricense. Limita al norte con Nicaragua; al este, con las provincias de Alajuela, Puntarenas y el golfo de Nicoya; al sur, con el océano pacífico; y al oeste,

con el mismo océano. Se ubica dentro de la región climática Pacífico Norte que se caracteriza por poseer una época seca y una lluviosa, bien definidas. En la década pasada el fenómeno El Niño provocó la extensión de la temporada seca, disminuyendo las fuentes de agua y dificultado la producción agroalimentaria y el turismo (Porrás, 2018).

La provincia cuenta con grandes llanuras y una actividad productiva ligada a la agricultura y ganadería. Ese paisaje característico dio lugar al sobrenombre de pampa guanacasteca (Porrás, 2018). Hace al menos tres décadas, Guanacaste inició una profunda transformación productiva y se ha ido orientando cada vez más al turismo y los servicios. Dicho cambio estuvo acompañado de importantes inversiones públicas en infraestructura que superaron a las recibidas por otras provincias periféricas como Puntarenas y Limón. Sin embargo, este modelo no ha resuelto las problemáticas de pobreza, desempleo y desigualdad, además ha mantenido un recurrente estado de conflictividad en torno a la distribución del agua entre los intereses de las inversiones de turismo y las necesidades básicas de la población.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) del 2017, en la provincia residen 377,241 habitantes, con una densidad de población de 37 habitantes por kilómetro cuadrado. El 26.9% de los hogares de Guanacaste son pobres y el ingreso promedio per cápita está por debajo del salario mínimo nacional (INEC, 2021). Se estima que conviven 117,610 hogares, un 40% de estos con jefatura femenina, el porcentaje más alto entre las regiones (Programa Estado de La Nación, 2000).

Respecto al uso del suelo, del total del área dedicada a la actividad agropecuaria, 28.03% está ocupada por pasturas, 19.84% son bosques, 4.03% son tierras de labranza, 7.59% está ocupado por cultivos, 17.11% por parques nacionales y 23.39% por otros usos (MAG, 2020). La región se caracteriza por contar con amplias extensiones de áreas protegidas, 48 en total. Se trata de la provincia del país que más ha recupe-

rado cobertura forestal en las últimas décadas. Su riqueza natural también está vinculada a la producción de energía, al ser la principal provincia proveedora de energía procedente del uso de recursos naturales hidráulicos, geotérmicos y eólicos. Tres plantas hidroeléctricas ubicadas en la provincia (Arenal, Corobici y Sandillal) representan el 45% de la capacidad instalada del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la generación hidroeléctrica nacional. La totalidad de la energía geotérmica y eólica que se produce en el país se genera en la provincia (Programa Estado de La Nación, 2000).

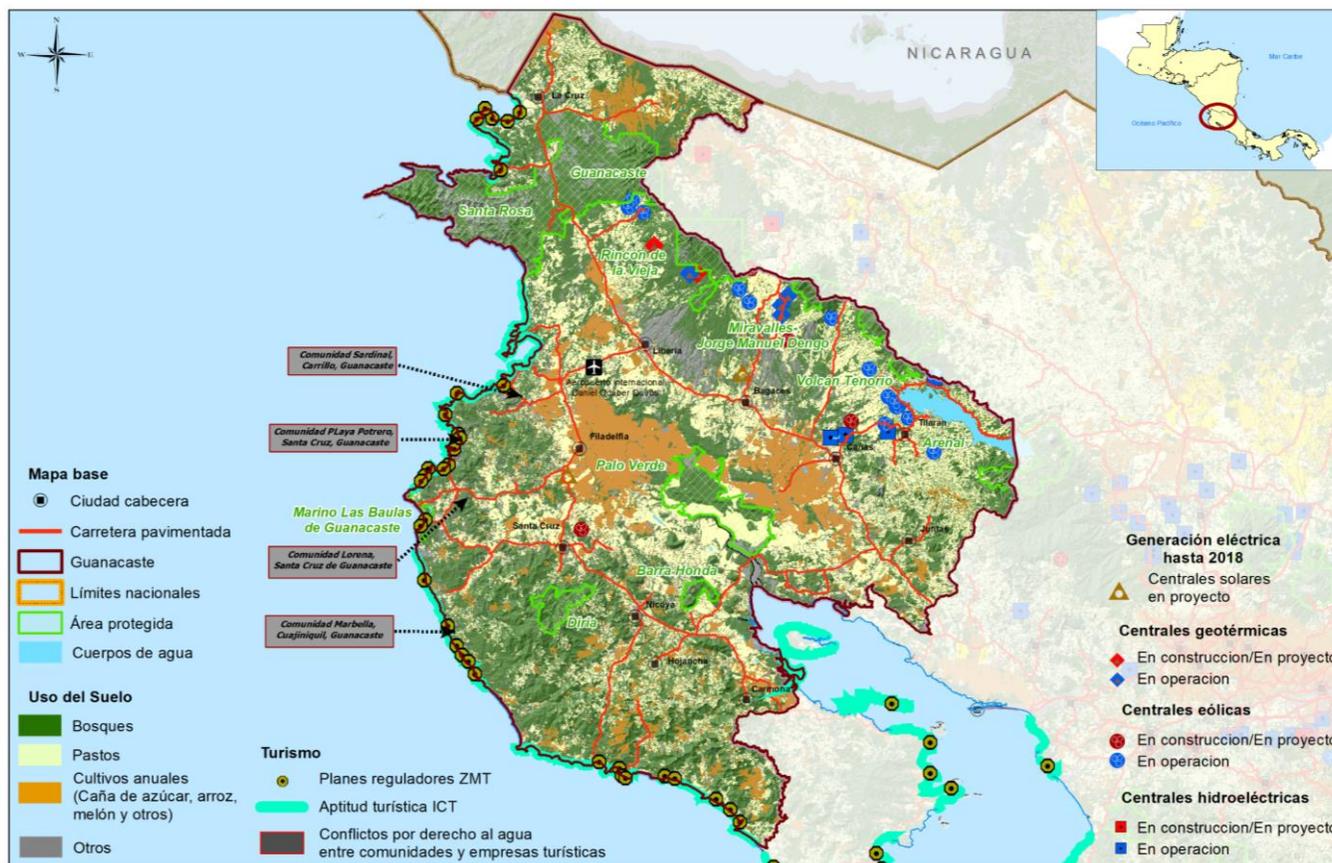
Principales dinámicas territoriales

Hasta mediados del siglo XX, en Guanacaste predominaban grandes haciendas tradicionales dedicadas a la ganadería de carne para la venta en mercados nacionales y centroamericanos, economía que coexistió con la producción campesina para autoconsumo, cuyos excedentes se vendían localmente.

En la década de los cincuenta se produce el primer gran cambio territorial, cuando las políticas de sustitución de importaciones y de diversificación agrícola modernizan los viejos sistemas productivos, especialmente la ganadería de carne y la caña de azúcar para exportación, y se fomenta la producción de arroz, algodón y sorgo para mercados nacionales. Esta dinámica productiva se desplegó bajo la orientación del enfoque de desarrollo regional, en el cual el Estado tomó un rol clave, dando lugar a grandes inversiones públicas en diversos sectores. Así, entre las décadas del cincuenta al setenta se realizan proyectos para el mejoramiento de caminos, la construcción de centrales hidroeléctricas y la primera fase del Distrito de Riego Arenal Tempisque.

En los años 1980 empieza a cobrar relevancia el turismo y la diversificación agrícola, al mismo tiempo se incrementa la inversión social con la construcción de escuelas, clínicas y hospitales (Blanco, 2019; Programa Estado de La Nación, 2000).

Mapa 7
Dinámicas territoriales en Guanacaste, Costa Rica



Fuente: Elaboración propia según Sistema de Información Territorial SNIT (2022); Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, accedido a través de Global Forest Watch (2022) Y Geocomunes (2018)

En los años 1990 la situación fue cambiando, en gran medida por el colapso de los mercados internacionales para los productos tradicionales de exportación. Los servicios, especialmente los relacionados con la actividad turística, ocupan un lugar cada vez más importante dentro del modelo de apertura comercial. Mientras en el sector agrícola solo se estimuló la modernización de pocas actividades productivas: caña de azúcar, arroz y melón. Al mismo tiempo se da una caída de la ganadería y la producción de granos básicos (Blanco, 2019; Programa Estado de La Nación, 2000).

Los cambios en la economía del territorio se reflejan en el empleo, las actividades agropecuarias pasaron de representar un 25.3% en 2001, a solo un 13.6% en 2016, mientras que el empleo en hoteles y restaurantes vinculados a la actividad turística creció de 9.4%

a 12.8% en el mismo período. Un sector que ha crecido bastante es el de servicio doméstico, de 3.5% a 10%, lo cual ofrece una alternativa para la inserción laboral femenina, pero que se caracteriza por la precariedad laboral y los bajos salarios (Programa Estado de La Nación, 2017).

En el sector agrícola, la inmigración nicaragüense ha servido como mecanismo para suplir la demanda de mano de obra y mantener bajos salarios (Acuña, 2011). Los trabajadores nicaragüenses constituyen el 41% de la mano de obra utilizada en la producción de caña y el 32% en la producción de melón en las regiones Pacífico Seco y Chorotega (Programa Estado de La Nación, 2000).

La expansión del turismo en Guanacaste es otra de las principales dinámicas territoriales. El Estado ha

mantenido un apoyo continuo al crecimiento del turismo, desde los años 1970 se plantea el proyecto turístico Golfo de Papagayo, que se consolida en los años 1990. En esa década también se inaugura el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (Blanco, 2019). Para los años 2000, la Provincia de Guanacaste se posiciona como el principal destino turístico de Centroamérica, principalmente en el segmento de sol y playa gracias a sus más de 700 kilómetros de costa pacífica y la fuerte inversión pública y privada. La oferta inmobiliaria vinculada al turismo se dirige específicamente para personas que mayoritariamente no viven en este territorio de manera permanente, consistente en casas de veraneo, condominios cerrados, marinas y campos de golf, entre otras amenidades, que refleja un fuerte interés por el desarrollo de mercado costero de bienes raíces (Cañada, 2013; Román, 2012).

El despliegue del turismo inmobiliario y de grandes complejos turísticos (*resorts*) conlleva preocupaciones por su desvinculación con los medios de vida locales. Su desarrollo ha significado la reorganización del espacio tradicionalmente rural, concentrando la oferta de atención al turista en ciertos lugares y creando infraestructura que permita su expansión: carreteras, generación de energía y su red de distribución, pozos de agua y acueductos, entre otros. Dichas inversiones han llegado a incidir negativamente en los medios de vida de las comunidades rurales, a causa de la desposesión de la tierra, privación o escasez del agua y la degradación de los ecosistemas marítimos (Arroyo, 2022; Cañada, 2019; Vargas, 2013). El tema del agua ha sido el principal motivo de disputa y preocupación entre comunidades, grupos ambientalistas y desarrolladores inmobiliarios (MIDEPLAN, 2018; Sanabria, 2022; Silva, 2022).

Desde la explosión del mercado inmobiliario en 2001 la gestión del agua y su acceso se ha convertido en uno de los limitantes críticos para el desarrollo turístico-residencial, a la vez que su sobreexplotación puede suponer un claro riesgo para la población local (Girardi, 2009; Van Noorloos, 2013). Por otro lado, no existe una adecuada disposición de los desechos sólidos. Para 1996, la mitad de los desechos sólidos generados por las empresas y la población no era recolectada por el servicio público, con repercusiones en

los recursos naturales de la zona, especialmente en el recurso hídrico (Programa Estado de La Nación, 2000).

Cuando las necesidades básicas de la población local y los intereses de las inversiones turístico-residenciales entran en contradicción a causa de la escasez de agua, surgen intensos conflictos socioambientales (Cañada, 2019; Girardi, 2009; Vargas, 2013). Los impactos de las inversiones del sector turismo en los medios de vida locales generan múltiples malestares y problemas sociales: transformación de vecindarios al servicio del turismo, masificación y privatización de espacios públicos, incremento del costo de la vida, disminución de la oferta de vivienda para uso residencial, saturación del transporte público, aumento del ruido y pérdida de calidad de vida. Todo ello genera ciertas manifestaciones y rechazo al turismo y profundiza las lógicas de dependencia (Cañada, 2019).

La conflictividad alrededor del turismo expresa las contradicciones del modelo de crecimiento económico aplicado en el territorio. Las inversiones inmobiliarias vinculadas al turismo, el despliegue de infraestructura y las inversiones agroindustriales son nuevas áreas de actividad económica que no han logrado integrar a sectores de población rezagada y más bien reproducen patrones de desigualdad, de manera que, a pesar de los flujos constantes de inversión, el desempleo, los empleos de mala calidad y los conflictos socio ambientales se mantienen en el territorio.

En el caso del empleo, el cambio en la estructura ocupacional no ha sido acompañada por un mejoramiento en la calidad de los empleos generados: mientras que la tasa de desempleo en la Región Chorotega es de 12.4%, ligeramente más alta que las demás regiones de planificación, la población con empleo informal es del 50% respecto al total de ocupados (INEC, 2022). La actividad turística no necesariamente promueve empleos de tiempo pleno, pues la mayoría de los hoteles recorta su personal durante la temporada baja, durante la cual queda cesante del 50% al 70% del personal. Los empleos generados por las nuevas actividades agrícolas muestran las mismas características del empleo tradicional (estacionalidad e inestabilidad), a su vez son altamente dependientes

del trabajo de migrantes, especialmente nicaragüenses, que laboran en condiciones extremadamente precarias. De acuerdo con Baumeister (2021) el 54% de estos trabajadores vive en condiciones de pobreza multidimensional, siendo el 50% trabajadores informales. Es decir, las nuevas inversiones no se traducen en mejor calidad de vida para buena parte de la población (Programa Estado de La Nación, 2017).

El modelo económico ha producido fuertes impactos ambientales y tiene implicaciones en la vulnerabilidad climática del territorio. El crecimiento desordenado del turismo residencial se debe en gran parte a la falta o debilidad de medidas de regulación ambiental, señalándose el otorgamiento de permisos de construcción sin estudios previos de impacto ambiental, dando lugar a la explotación de acuíferos, mal manejo de aguas servidas y de disposición de desechos sólidos.

La expansión de cultivos agroindustriales ha estado asociada al fuerte incremento del uso de plaguicidas (Baumeister, 2021). Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de plaguicidas por hectárea cultivada del mundo, incidiendo en la contaminación del suelo, el agua, así como daños en la biodiversidad (Arroyo 2022; Cañada, 2019; Girardi, 2009).

Guanacaste es una región vulnerable al cambio climático debido a su dependencia en el desarrollo turístico, agropecuario, agroindustrial y energético. De acuerdo con MINAE (2021), la mayor frecuencia de fenómenos extremos, sequías, huracanes, tormentas y lluvias afectan los sectores productivos, pero también los medios de vida de la población, especialmente las familias en condición de pobreza.

En la vulnerabilidad climática de Guanacaste también inciden factores derivados de la falta de una gestión ambiental territorial inclusiva. Por ejemplo, la población pobre en zonas de riesgo se ve expuesta al problema de inundaciones frecuentes. Las diversas disputas por el acceso al agua entre comunidades y los desarrolladores de turismo y una producción agroindustrial altamente demandante de agua son dinámicas que incrementan las presiones sobre un recurso escaso en una región que todavía carece de instrumentos efectivos para el ordenamiento territorial

y la prevención de riesgos. De continuar estas condiciones la población se vería afectada por los potenciales impactos del cambio climático: inseguridad alimentaria, escasez o deterioro de los servicios de agua y mayor propensión a daños por eventos climáticos extremos, además se comprometería la competitividad de los sectores agroindustriales y del turismo.

Implicaciones para la gobernanza

En el territorio de Guanacaste se ha ido conformando una sociedad diversa: residentes históricos, migrantes laborales, turistas residenciales entre otros, con intereses contrapuestos y fuertes desigualdades, tornan compleja la gobernanza territorial. Si bien existen diversas formas de organización local, los gobiernos locales tienen poco peso y poca interacción con la población (Van Noorloos, 2013), además no se percibe una actuación coordinada y sostenida entre los actores que permita incidir en la toma de decisiones sobre el desarrollo de su territorio (Programa Estado de La Nación, 2017).

En la década pasada surgieron estrategias y mecanismos de planificación regional que han estimulado espacios de participación, este es el caso del Consejo Regional de Desarrollo (COREDES) de la Región Chorotega integrado por gobiernos locales, actores privados, organizaciones cívico comunales, sector académico, sector ambiental y representantes de los Consejos de Desarrollo Rural Territorial, desde donde definieron proyectos para el abastecimiento de agua, la comercialización de la agricultura familiar e infraestructura (MIDEPLAN, 2018). Este tipo de mecanismos oficiales resulta importante para canalizar la participación de la población en la toma de decisiones, pero el desafío para la gobernanza territorial es que la población se apropie de estos espacios y se involucre activamente en la definición de sus propios caminos de bienestar, incluyendo en ello el abordaje y negociación de conflictos.

Para avanzar en la gobernanza territorial en una sociedad con actores tan diversos y desiguales, se vuelve importante comprender mejor las características e intereses prioritarios para las organizaciones sociales, las municipalidades, academia, empresarios, produc-

tores, jóvenes, mujeres y en general del complejo tejido social territorial, así como fomentar espacios de encuentro y concertación regional con carácter positivo para promover una visión de desarrollo que atienda las problemáticas del territorio desde las lógicas de sus habitantes.

La atención a las desigualdades territoriales es otro elemento clave para la gobernanza, siendo importante promover acciones efectivas para mejorar las condiciones de grupos vulnerables como los trabajadores migrantes y la población viviendo en áreas de riesgo. Respecto a la población migrante, durante la crisis sanitaria por COVID-19 la preocupación por garantizar el ciclo agrícola 2020-2021 llevó a que el Estado y las cámaras empresariales vinculadas al agro formularan distintas iniciativas para asegurar la mano de obra, se realizaron campañas para la legalización de trabajadores nicaragüenses y se estableció un acuerdo binacional con el gobierno de Nicaragua que permitía la entrada formal a trabajadores (Baumeister, 2021). Pero más allá de resolver las preocupaciones de los empresarios es sustancial garantizar los derechos humanos y laborales de la población migrante con medidas de política que aseguren su estabilidad laboral y migratoria (Acuña et al., 2011).

Finalmente es importante considerar que el esfuerzo social en la gobernanza territorial permitiría una mejor articulación y encadenamientos territoriales, especialmente entre las dimensiones económica social y ambiental, lo derivaría en más efectividad para enfrentar la vulnerabilidad socio ambiental y las brechas sociales que aun prevalecen.

Región del Darién, Panamá

En un sentido limitado, nos referimos por región del Darién al territorio panameño comprendido por la provincia del Darién (con el corregimiento comarcal de Wargandí al norte), la comarca Guna Yala y la comarca Emberá Wounaan. Sin embargo, en términos amplios también incluye territorios de la provincia de Panamá, así como municipios al norte del departamento colombiano del Chocó.

La gobernanza en las divisiones administrativas mencionadas difiere significativamente debido a su naturaleza. Mientras que la provincia del Darién es administrada a través de un gobernador designado por el gobierno central, las comarcas indígenas y las tierras colectivas gozan de cierta autonomía para regirse de acuerdo con sus costumbres e instituciones. Las comarcas indígenas fueron reconocidas después de la lucha del pueblo Guna por su autonomía durante la revolución Dule en 1925 y formalizadas en la ley 16 de 1953. Son regidas por sus autoridades tradicionales electas según sus tradiciones, los Sailas Dumagan en el caso del pueblo Guna y los Caciques Generales y los Regionales en el caso de los pueblos Emberá y Wounaan. Las tierras colectivas están reguladas por la ley 72 del 2008 y establece el procedimiento para la Adjudicación Gratuita de la propiedad colectiva de tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos y comunidades indígenas que no están dentro de Comarcas.

En esta región se encuentra lo que comúnmente se denomina como “el tapón del Darién”, es decir la densa selva tropical que domina el paisaje e impide el transporte terrestre convencional continuo en dirección sur y suroeste, hacia Colombia. Ello caracteriza al territorio por contener el único tramo no construido de la carretera Panamericana, que se proyectó para que uniera el continente desde Alaska, al norte, hasta Argentina en el sur.

El Darién panameño se caracteriza por ser la zona menos densamente habitada del país (Castillo, 2020). Sus habitantes pertenecen principalmente a las etnias indígenas Emberá, Guna y Wounaan, además de mestizos y afrodariénitas, estos últimos dos grupos principalmente presentes en la provincia del Darién (F-ODM, 2010).

Económicamente, la provincia del Darién es la más rezagada del país. Esta aporta únicamente un 0.3% a la economía nacional. Además, a pesar de tener una tasa de desempleo bastante baja –solamente del 2.8%– mantiene altos niveles de informalidad y po-

Mapa 8
Dinámicas territoriales en la región del Darién, Panamá



Fuente: Elaboración propia según Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, accedido a través de Global Forest Watch (2022); Rainforest Foundation US (tomado de <https://es.mogabay.com/2019/06/indigenas-panama-darién-video/>) y Colectivo Darién (2021) y EPR (2014) recuperado en <https://www.eprsipac.com/contenido/interconexion-panama-colombia>

breza –60.7% y 43.1% respectivamente— lo cual refleja una situación de precariedad de una porción significativa de sus habitantes (CAD, 2018). Sin embargo, se identifica en el sector agropecuario un posible motor de desarrollo ante las ventajas comparativas que la provincia tiene con respecto a otras apostándole a la incorporación de tecnología y la mejora de rendimientos ganaderos (Ibid).

En las comarcas indígenas, la producción agrícola se orienta al autoconsumo, predominando cultivos como el maíz o el ñame. Pero también producen cultivos que entran en canales de comercialización como el café, el aguacate, el oteo o el plátano (F-ODM, 2010). Otras actividades económicas presentes son la

comercialización de madera —y sus permisos— así como la producción de artesanías y molas¹² (Ibid). En términos de infraestructura, la principal vía de comunicación terrestre es el tramo de la carretera Panamericana que llega hasta la localidad de Yaviza. Este tramo refleja algunas de las fuertes contradicciones que enfrenta esta región: por un lado, el avance de la deforestación en favor de la ganadería y extracción de madera; y por otro, el mal estado de la propia vía (Ficek, 2021). Fuera de ella, el transporte fluvial y aéreo por medio de avionetas y rudimentarias pistas de aterrizaje de tierra son los principales medios de transporte.

¹² Tejido colorido hecho a mano propio de la cultura Kuna.

La región también tiene un importante potencial para el turismo. En los años 1980 importantes inversiones extranjeras intentaron posicionarse en la Bahía de San Blas, dentro de los límites de la Comarca Guna Yala. Sin embargo, las autoridades comarcales identificaron una incompatibilidad de estas con los usos de las comunidades locales e intervinieron para poner fin a las mismas. El gobierno panameño también se ha planteado grandes proyectos, de los que ninguno se ha concretado al no contar con el consentimiento de las autoridades comarcales (Martínez Mauri, 2010). Hoy en día, es el pueblo Guna Yala, a través de la Secretaría de Asuntos de Turismo, supeditada al Congreso General Guna, quien articula las iniciativas del sector, respetando los valores propios y lideradas por locales que ven en el rubro un complemento a sus actividades tradicionales (Martínez Mauri, 2010).

A nivel ecológico, la región del Darién está cubierta por aproximadamente 1.3 millones de hectáreas de bosque tropical (Mateo-Vega et al., 2019) lo que representa 24.44% de los bosques de Panamá.¹³ Por su extensión, es considerado uno de los 5 Grandes Bosques de Centroamérica. Además, es un sitio de alto valor por su biodiversidad y por su cantidad de especies endémicas. Entre la fauna destacable podemos citar el jaguar, el pecarí de labios blancos y el área más importante de Centroamérica para las águilas arpías (WCS, s.f.).

Un reciente estudio sobre los niveles de carbono presente en la vegetación por encima del suelo muestra que los bosques de la región están entre los más ricos en carbono del trópico, pero también con una alta riqueza de especies de árboles, lo que hace del Darién una zona clave tanto para la lucha contra el cambio climático como para la conservación de la biodiversidad (Mateo-Vega et al., 2019).

Sin embargo, es la región de Panamá que más reporta deforestación en los últimos años. Según Global Forest Watch (2022a), la cobertura arbórea a nivel nacional disminuyó en un 8.2% entre 2001 y 2021 (466 mil hectáreas), tres provincias fueron causantes del

52% de la pérdida, siendo Darién la de mayor pérdida con 111 mil hectáreas, lo que equivale a una disminución del 9.8% de su cobertura arbórea para ese período de tiempo.

Principales dinámicas territoriales

La región del Darién, por su ubicación, siempre ha sido influenciada por las dinámicas de integración geográfica. Si bien nunca se abrió formalmente el tapón del Darién, la sola previsión de su apertura en el siglo XX provocó desplazamiento de poblaciones, especulaciones sobre la tierra, migraciones por ganadería y conflictos relacionados con la tala (Graef et al., 2022).

Más recientemente, en 2016 se reactivó el proyecto de conexión eléctrica entre Colombia y Panamá que uniría el mercado eléctrico de ambos países, pero también entre el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA). Este avance en la interconexión entre los dos vecinos vuelve a abrir la posibilidad de una conexión terrestre a través del Darién (Colectivo Darién, 2021; Testa, 2022). Más allá de la ampliación de la carretera Panamericana se han desarrollado en los últimos años una serie de carreteras formales, promovidas por el ministerio de agricultura, así como informales relacionadas con diversos tráficos ilícitos (Colectivo Darién, 2021).

La apertura de caminos ha conllevado un alza de la deforestación la cual se estima en una pérdida de 40% de los bosques en los últimos 30 años. En los últimos 10 años, 90% de la pérdida de bosque se atribuye a la tala ilegal (Colectivo Darién, 2021). Alrededor del año 2015 hubo un particular repunte de la tala ilegal de la madera preciosa de Cocobolo relacionada con un alza de la demanda proveniente de China (Vanderman & Velásquez Runk, 2020).

El tráfico ilegal de madera se combina en Darién con otras actividades ilícitas que se benefician del carácter remoto del territorio y por la cobertura boscosa

¹³ Según datos del Ministerio de Ambiente de Panamá revelados en el Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelos 2021 hay un total de 5,117,364 hectáreas de cobertura forestal en el país.

remanente, como la trata de personas desde Colombia, el tráfico de drogas, la explotación ilegal de oro y el tráfico de armas del norte hacia Colombia (Colectivo Darién, 2021).

Por su carácter fronterizo, la región ve pasar por su territorio importantes flujos de migrantes. Mientras que hasta hace unos años eran principalmente personas provenientes de Colombia huyendo de la violencia del conflicto armado, a partir de 2016 son cada vez más las personas que pasan a través del Darién en ruta hacia Norteamérica desde diferentes partes del mundo: tanto países de la región como Haití o Venezuela, hasta países asiáticos y africanos como Bangladesh, Uzbekistán o la República Democrática del Congo (IOM The Storyteller, 2022). Hasta la mitad del año 2022 ingresaron a Panamá 48,430 migrantes a través de la selva del Darién (ONU, 2022) de los que hasta un 15% son niños, niñas y jóvenes (UNICEF, 2022); y 2021 cerró con 133,000 personas (IOM, 2022).

La región también se ve afectada por las consecuencias del cambio climático, en particular por la variabilidad climática relacionada con sequías y cambios de patrones lluviosos que afectan la agricultura. Otro riesgo de suma importancia para las poblaciones costeras y las residentes en islas en particular es el aumento del nivel del mar, que se ha estimado en 19 centímetros entre 1990 y 2020, con una proyección de entre 0.55 y 0.75 metros de aquí al 2100, lo que pone en peligro el modo de vida de estas poblaciones (Ros García et al., 2020).

Implicaciones para la gobernanza

La presencia cada vez más marcada de los tráfico ilícitos, controlados en conjunto por carteles mexicanos y colombianos, están generando nuevas relaciones de clientelismo entre estos y la población local. Estas relaciones son atractivas por las oportunidades de ingreso mayor a una actividad legal, pero en muchos casos son también forzadas por la política de plata o plomo impuesta por los carteles. Estas nuevas relaciones de clientelismo se dan también con oficiales de seguridad pública involucrados en varios actos de corrupción y de tráfico de armas (Colectivo Darién, 2021).

La respuesta del Estado ante la presencia de carteles del crimen organizado ha sido principalmente militarista. En 2008 se creó el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) que es un ente de seguridad pública, que por un lado ha desarrollado relaciones de clientelismo brindando servicio a la población fuera de sus atribuciones y, por otro lado, ha cometido atropellos en contra de la población rural que han quedado impunes (Colectivo Darién, 2021).

En este contexto adverso, las comarcas indígenas juegan un rol fundamental, no sólo por sus instituciones colectivas de tenencia de la tierra y por sus sistemas de gobernanza basados en autoridades territoriales, sino también porque han logrado desarrollar proyectos de vida comunitarios logrando conservar su diversidad cultural y natural. Ejemplo de eso es el rol que las empresas forestales comunitarias han jugado en la protección del bosque, así como en la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico. Hasta 2015 más de un cuarto de la superficie de la comarca Emberá Wounaan se encontraba bajo aprovechamiento comunitario (PRISMA, 2015). Los beneficios de ese aprovechamiento sostenible repercutieron en el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza de la comarca, así como en la mejora del acceso a infraestructura básica de las comunidades locales (PRISMA, 2015).

El manejo forestal sostenible y, en general, el ejercicio efectivo de los derechos territoriales de parte de las comarcas se traduce en un claro beneficio en términos de conservación. Entre 2001 y 2021, en las comarcas indígenas Emberá Wounaan, Guna Yala y Guna de Wargandí presentaron muy bajas tasas de pérdida de cobertura arbórea, que oscilan entre 2% y 3%. Estas tasas son muy inferiores a la tasa reportada en el resto del Darién (9.8%). La gobernanza territorial que ejercen estos pueblos es igual o más eficiente para la conservación de los bosques que las áreas protegidas manejadas por el Estado. En Alto Darién y en el Parque Nacional de Darién tuvieron una tasa de deforestación de 4% y 0.54% respectivamente (Global Forest Watch, 2022a).

La gobernanza indígena es también esencial para asegurar la resiliencia de las comarcas ante choques externos, como lo fue la crisis sanitaria por COVID-19.

La comarca Guna Yala destacó en particular por niveles de incidencia del virus muy por debajo del promedio nacional y departamental (OPS, 2022). Gracias a su nivel de autonomía, las autoridades comarcales pudieron aplicar medidas tempranas y culturalmente apropiadas que han permitido que esta zona sea de las menos afectadas por el virus (Martínez Mauri, 2020).

Ante choques aún mayores como los relacionados al cambio climático, la Comarca Guna Yala también se está preparando desde hace 10 años ante el inminente aumento del nivel del mar, a través de la elaboración de un plan de reasentamiento de las comunidades isleñas hacia la tierra firme acompañado de esfuerzos por fortalecer la producción agrícola para asegurar la soberanía alimentaria (Davis et al., 2021).

Una gobernanza comunitaria robusta también permite que las autoridades indígenas estén en capacidad de negociar con las autoridades públicas. En el caso de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, el Congreso General Guna ha logrado entablar un proceso de consentimiento libre, previo e informado, dado que la interconexión pasará por la comarca Guna Yala (El Capital Financiero, 2021). En otros casos, existe todavía un pulso entre las autoridades indígenas y el gobierno, tal como ocurrió recientemente cuando la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) logró abrir una mesa de diálogo para discutir, entre otros, la titulación de tierras colectivas o el apoyo gubernamental para detener la invasión de tierras y tala ilegal

de parte de terceros en tierras comarcales (Crítica, 2022).

A pesar del rol primordial de la gobernanza indígena para mitigar los impactos de las dinámicas territoriales antes descritas, los pueblos indígenas siguen siendo marginados y estigmatizados en el tratamiento periodístico que se le da a la región. Los estudios académicos que se basan en sistematización de notas de prensa revelan un sesgo en resaltar la etnicidad indígena en los casos de colaboración con los diversos tráfico ilícitos, aunque esta sea, a menudo, forzada.

Otro reto importante para la gobernanza territorial en Darién es el rol que tendrán los mecanismos de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+) y otros mecanismos de venta de carbono. El proceso a nivel nacional se detuvo en 2012 por irregularidades del programa ONU-REDD con respecto al consentimiento de los pueblos indígenas (Cuéllar et al., 2013). Sin embargo, recientemente ha reaparecido el interés de actores privados por comprar bonos de carbono directamente con las comarcas (ANPanamá agencia de Prensa, 2022). Recientemente el gobierno también está buscando crear un mercado nacional de carbono (Chandiramani, 2022) lo que podría ser una oportunidad de financiamiento territorial para las comarcas indígenas, pero también es un riesgo si no es acompañado de las salvaguardas adecuadas.

IMPLICACIONES PARA UNA AGENDA DE APOYO ESTRATÉGICO DE LA SOCIEDAD CIVIL A LOS ACTORES TERRITORIALES

Centroamérica atraviesa por una serie de dinámicas que profundizan los históricos patrones de exclusión y degradación ambiental. En varios países de la región ya se vive, o están al borde de una ruptura del Estado de Derecho, se ha cerrado o se está reduciendo el espacio cívico y de participación ciudadana en el marco de procesos acelerados de concentración de poder, que a su vez son el resultado de la influencia que ejercen grupos que entretejen sus intereses con la actuación de los órganos de Estado. En varios países de la región, además de la influencia histórica de grupos de élites tradicionales, nuevos actores vinculados con actividades ilícitas –principalmente el narcotráfico– aprovechan la cultura patrimonialista para establecer vínculos con el Estado, pero también despliegan nuevas estrategias de control territorial, como la “narco-deforestación” y la “narco-ganadería”.

Dinámicas como las anteriores, confluyen además con el renovado interés económico por los recursos naturales, así como con los crecientes y severos impactos ocasionados por la variabilidad y el cambio climático en una región caracterizada por su alta vulnerabilidad.

La región atraviesa por una crisis de los sistemas de partidos políticos y con ello, la ausencia de propuestas y proyectos de desarrollo capaces de impulsar transformaciones socioeconómicas y ambientales sustantivas desde el Estado; los sistemas de justicia están cada vez más controlados y utilizados contra sectores y organizaciones que por ejemplo reclaman derechos; en varios países simplemente ya no existen espacios de participación en la elaboración e implementación de políticas públicas; cada vez más está siendo cooptado el espacio de la opinión pública a través del control e imposición de narrativas favorables para los grupos de poder; las organizaciones de la sociedad civil son asediadas, perseguidas y criminalizadas por su

trabajo de defensa y actuación desde el espacio cívico; y finalmente, líderes y lideresas ambientales y territoriales están siendo perseguidos y asesinados.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que las comunidades rurales campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes de la región enfrentan amenazas contra sus tierras, sus medios de vida y sus derechos como nunca se había visto, con excepción de las condiciones de guerra. La sola decisión de querer vivir una vida digna en sus territorios y de mantener sus derechos a los recursos naturales se ha convertido en una opción extremadamente peligrosa, como resultados de la inseguridad, la cooptación o la destrucción de los sistemas de gobernanza local.

Los territorios y sus organizaciones están “*en primera línea*” de asedio de parte de actores estatales, económicos (nacionales y transnacionales) y de organizaciones del crimen organizado. Pero al mismo tiempo, los territorios y sus organizaciones también representan una de “*las últimas fronteras*” fundamentales para la resiliencia. Si bien es en los territorios rurales donde se encuentran los recursos naturales y donde se generan servicios ecosistémicos clave para la resiliencia, son los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las comunidades locales, en la medida que mantienen su capacidad para decidir sobre los recursos naturales, sus medios de vida y sus formas de organización en sus territorios, los que están construyendo los sistemas de gobernanza local y territorial capaces de poner estos recursos naturales y servicios ecosistémicos en función de la resiliencia de sus comunidades y de las sociedades en general.

La región centroamericana cuenta con una gran variedad de experiencias de esta índole, como ocurre con el manejo forestal comunitario que permite conciliar la conservación de los bosques con el desarrollo de las

comunidades; con el avance de la agroecología como base para la seguridad y soberanía alimentaria; con la restauración de recursos críticos como el agua, así como con una amplia diversidad de estrategias ancestrales de manejo de recursos naturales por parte de comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes. La mayoría de estas iniciativas presentan escalas limitadas, pero representan valiosas propuestas e innovaciones productivas, organizativas e institucionales que propician sinergias entre las agendas de adaptación y mitigación del cambio climático, a la vez que diversifican las economías locales, contribuyendo a generar oportunidades económicas y cohesión territorial. Esto es posible gracias al rol protagónico que estos actores tienen en la vida institucional de los territorios, junto a otras organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, fortaleciendo con ello plataformas y sistemas de gobernanza.

Sin embargo, los desafíos que imponen estas dinámicas en la región son de tal magnitud y complejidad, que ningún actor territorial, comunidad rural o autoridad indígena puede enfrentarlas sola. Los contextos de violencia, corrupción, impunidad y erosión del Estado de Derecho tensionan y destruyen los sistemas de gobernanza territorial, perdiéndose capacidades clave para impulsar –por ejemplo– el escalamiento de prácticas de manejo sustentable de recursos naturales. De allí la importancia de construir resiliencia basada en la defensa de derechos humanos de primera generación (derecho a la vida, derechos políticos y civiles) así como los derechos de segunda y tercera generación (derechos socioeconómicos, culturales, territoriales y autodeterminación) (PRISMA, 2021).

En este contexto no se puede esperar que respuestas transformadoras sean lideradas desde el Estado, ni desde el sector privado. De hecho, existen diversos esfuerzos e iniciativas desde la sociedad civil en apoyo a los actores que defienden los recursos naturales y los territorios “*en primera línea*”, los cuales han sido importantes e imprescindibles, pero también insuficientes y fragmentados frente al aumento y profundización de las múltiples amenazas que enfrentan. Así, las organizaciones de sociedad civil pueden jugar un rol clave fortaleciendo la voz y poder de actores locales y territoriales si reconocen la complementariedad de

sus objetivos, si coordinan esfuerzos para lograr sinergias a largo plazo y si logran articular narrativas convincentes y de esperanza frente a un contexto sumamente adverso.

Nuestra hipótesis principal es que un esfuerzo concertado significativo dentro y entre distintos ámbitos de trabajo en que se desempeñan las organizaciones de la sociedad civil permitiría co-construir una agenda compartida que contribuya a fortalecer su cohesión social y que consolide estratégicamente sus conocimientos, capacidades e impacto colectivo. Al mismo tiempo, esto supone la necesidad de vincular de manera más estratégica esferas de trabajo de la sociedad civil históricamente separadas.

La gobernanza territorial, para que sea democrática, inclusiva y sustentable, requiere de actores territoriales fortalecidos en sus derechos políticos y civiles, así como en sus derechos socioeconómicos, culturales, territoriales y de libre determinación. Por ello, cualquier intento de fortalecer la gobernanza territorial pasa, también, por fortalecer el tejido social, incluyendo un esfuerzo deliberado para propiciar articulaciones y colaboraciones estratégicas dentro y entre los diferentes campos de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en apoyo a los actores territoriales.

No existe una receta sobre qué tipo de colaboraciones son necesarias para defender de manera efectiva los derechos y los medios de vida de los actores territoriales, o para fortalecer las capacidades de incidencia política, liderazgo y de gestión. Esto variará de acuerdo con las dinámicas específicas que enfrentan las comunidades y los actores “*en primera línea*” en los distintos territorios.

Existe una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil que tienen diferentes enfoques, campos de trabajo y especialización. Tomando como base las dinámicas y desafíos en diferentes territorios como los presentados en este informe, es posible identificar una serie de ámbitos de apoyo que se verían fortalecidos a través de la construcción de colaboraciones estratégicas entre diversas organizaciones de la sociedad civil. Estas colaboraciones se podrían dar, por ejemplo, en los siguientes ámbitos de apoyo:

- Mejorar el conocimiento y lectura del contexto, tanto de lo que está ocurriendo en los territorios, como los contextos y tendencias regionales y globales que moldean los territorios para, así, informar acciones, procesos y estrategias de los actores en “*primera línea*”.
- En el ámbito del litigio para la protección, aportar a la superación de brechas en la institucionalidad existente para tutelar los distintos tipos de derechos. Hay mayor desarrollo de los marcos para la defensa de derechos civiles y políticos (actualmente amenazados), que contrasta con la insuficiencia de instrumentos institucionales para la defensa de los derechos socioeconómicos, culturales, territoriales y de libre determinación. No obstante, hay diversas arenas para la defensa de estos derechos, desde tribunales nacionales hasta tribunales de conciencia, donde es posible utilizar más articuladamente distintos marcos de tutela (leyes nacionales, convenios internacionales, salvaguardas sociales y ambientales, regulaciones y tratados de comercio e inversión, certificaciones, códigos de ética, etc.).
- Fortalecer las iniciativas de manejo sustentable de los recursos naturales y construcción de resiliencia. Este campo de trabajo está vinculado a la asistencia técnica orientada a diversificar o robustecer las estrategias de medios de vida y de producción. La importancia de estas iniciativas va más allá de la articulación con el mercado, pues al mismo tiempo que representan alternativas frente al extractivismo, se convierten en referentes de manejo y producción sustentable para escalar la restauración ambiental y resiliencia en los territorios.
- Fortalecer la comunicación para evidenciar y denunciar el acoso y el asedio hacia los actores territoriales; para cuestionar los discursos y paradigmas hegemónicos de desarrollo; y para visibilizar

y posicionar narrativas de esperanza que animen la acción colectiva, iluminando rutas hacia sistemas de gobernanza más democráticos, sustentables y resilientes que se construyen desde los territorios.

- La formación y capacitación de distinta índole, que buscan llenar vacíos de especialidades (técnicas, legales, comunicacionales, administrativas, de investigación, etc.), fortaleciendo, al mismo tiempo, las capacidades de desarrollo organizativo, de liderazgo y de gobernanza de una nueva generación de líderes y lideresas territoriales con capacidades de lectura crítica, de representación y vocería, de negociación política, etc.

A través de estos y otros ámbitos de colaboración (rescate de la identidad y cultura, fortalecimiento organizativo, desarrollo de alternativas productivas, etc.) es posible vincular nuevos actores hasta ahora desvinculados del apoyo a los actores territoriales. Por ejemplo, los actores que defienden la democracia y el Estado de Derecho podrían vincularse al ámbito de la defensa territorial para hacer valer derechos de participación y propiedad colectiva; o bien, organizaciones de gestión de conocimiento vinculándose con organizaciones de periodismo investigativo y otras de defensa legal para fortalecer luchas contra el atropello de derechos ocasionados por el extractivismo.

Este tipo de colaboraciones, en la medida que contribuyen a construir lazos de confianza y de trabajo, no solo suman esfuerzos y capacidades entre comunidades, territorios y organizaciones de la sociedad civil, si no que resultan ser también una de las vías más importantes para canalizar un poder social que pueda enfrentar las dinámicas que amenazan las bases de la gobernanza democrática y sustentable en los territorios.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, Guillermo ... et al. (2011). *Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana. Informe Regional*. San José, Costa Rica: OIM, OIT, MTSS, CECC SICA, Red de Observatorio del Mercado Laboral. San José.
- Ambientum (2019). *Guna Yala se hunde bajo el Mar Caribe*. Publicado el 1 de febrero 2019. Disponible en: <https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/guna-yala-mar-caribe.asp>
- ANPanamá agencia de Prensa. (2022). *Comarca indígena panameña saldrá al mercado con 12 millones 500 mil títulos valores*. Recuperado de <https://www.anpanama.com/11572-Comarca-indigena-panamena-saldra-al-mercado-con-12-millones-500-mil-titulos-valores-.note.aspx>
- Arroyo, César (2022). *Los millonarios desvergonzados y la provincia con hambre, ¿es así el turismo en Guanacaste?* Disponible en: <https://vozdeguanacaste.com/millonarios-provincia-hambre-turismo-guanacaste/>
- Kothari, Ashish; Salleh, Ariel; Escobar, Arturo; Demaria, Federico y Acosta, Alberto (coords.) (2019). *Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo*, Icaria Editorial, Barcelona, España, ISBN: 978-84-9888-884-3
- Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) (2015). *Resistencia de Garifuna en Vallecito contra el acaparamiento de la tierra para plantaciones de aceite de palma y comercio de drogas*, Honduras.
- Azpuru, Dinorah; Blanco, Ligia; Córdova M., Ricardo; Loya, Nayelly; Ramos, Carlos G.; Zapata, Adrián (2007). *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Un enfoque comparado entre Guatemala y el Salvador*. F&G Editores, Guatemala.
- Ballón Echegaray, Eduardo; Rodríguez Sosa, Jorge; Zeballos Manzur, Molvina (2009). *Fortalecimiento de Capacidades para el DTR: Innovaciones Institucionales en Gobernanza Territorial*. Documento de Trabajo N° 53. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago de Chile.
- Baracco, Luciano (2018). *Globalization, governance, and the Emergence of Indigenous Autonomy Movements in Latin America. The case of the Caribbean Coast of Nicaragua*. Latin American Perspectives, Issue 223, vol 45, No 6.
- Baumeister, Eduardo (2021). *Inserción laboral en el agro costarricense. El caso de los nicaragüenses*. Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS, vol. 34, n.º 49.
- Bebbington, Anthony (2013). *Natural resource extraction and the possibilities of inclusive development: Politics across space and time*. ESID Working Paper No. 21. Manchester, UK.
- Bebbington, Anthony; Bebbington, Denise Humphreys; Sauls, Laura Aileen; Rogan, John; Agrawal, Sumali; Gamboa, César; Imhof, Aviva; Johnson, Kimberly; Rosa, Herman; Royo, Antoinette; Toumbourou, Tessa; and Verdum, Ricardo (2018). *Resource extraction and infra-structure threaten forest cover and community rights*. PNAS. Vol. 115, No. 52.
- Bebbington, Anthony; Abdulai, Abdul-Gafaru; Bebbington, Denise Humphreys; Hinfelaar, Marja y Sanborn, Cynthia (2019). *Gobernanza de las industrias extractivas. Política, historia, ideas*. Lima. Universidad del Pacífico.
- Blanco, Edgard Eduardo Obando (2019). *¿Ha sido la región Chorotega un territorio olvidado? Políticas de desarrollo social y productivo, 1950-2014*. Revista de Ciencias Sociales, vol. I, núm. 163, pp. 69-87. Universidad de Costa Rica
- Blume, Laura R. (2022). *Collusion, Co-Optation, or Evasion: The Politics of Drug Trafficking Violence in Central America*. Comparative Political Studies, Vol. 55(8).
- Blume, Laura Ross, Sauls, Laura Aileen y Knight, Christopher (2022). *Tracing Territorial-Illicit Relations: Pathways of Influence and Prospects for Governance*. Political Geography, Vol. 97, <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102690>.
- Briscoe, Ivan; Rodríguez Pellecer, Martín (2010). *A state under siege: elites, criminal networks and institutional reform in Guatemala*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
- CAD (2018). *Competitividad al día #360 – situación económica y social de 7 provincias seleccionadas*. CNC.
- CALAS (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. Alemania.
- Camino, Ronnie de (2018). *Diagnóstico del sector forestal en Nicaragua: movilizándolo el sector forestal y atrayendo inversiones*. Nota técnica del BID.
- Cano Romero, Aberto (2018). *Condiciones laborales de los trabajadores agrícolas de la palma de aceite en el norte de Guatemala*. Revista Eutopía. Año 3, número 6.
- Cano Romero, Aberto (2021). *Voces desde las productoras: efectos del Covid-19 en la agricultura familiar de Alta Verapaz y Sacatepéquez*. Análisis de Coyuntura Covid 19 en América Latina, diciembre 15 no. 23. Rimisp.
- Cañada, Ernest (2013) *Turismo en Centroamérica. Un diagnóstico para el debate*. Managua: Editorial Enlace.
- Cañada, Ernest (2019). *Conflictos por el agua en guanacaste, costa rica: respuestas al desarrollo turístico*. Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 45: 323-344
- Cartagena, Rafael E. (2017). *“Conflictos ambientales y movimientos sociales en El Salvador de posguerra”*. En: Almeida, Paul y Cordero, Allen (Eds.). *Movimientos sociales en América Latina. Perspectivas, tendencias y casos*. CLACSO, Buenos Aires.
- Castillo, Sergio (2020). *Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: informa nacional Panamá*. FAO.
- CEJIL (2022). *Nicaragua: CIDH pide al Estado salvaguardar la vida y la integridad de personas indígenas del Territorio Mayangna*. Comunicado de prensa

- Centro Humboldt (2019). *Valoración socioambiental de la actividad minera metálica en Nicaragua; en Crisis socio ambiental de Nicaragua post sequía 2016*. Managua. Disponible en: <https://humboldt.org.ni/informe-tesis-socio-ambiental-de-nicaragua-post-sequia-2016-2/>. Consultado 9/9/2022
- CEPAL (2021). *Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México*. Síntesis. Santiago.
- Chandiramani, Rekha (2022). *Bonos de carbono en Panamá: Pros y contras*. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de TVN Panamá website: https://www.tvn-2.com/contenido-exclusivo/bonos-carbono-panama-pros-contras_1_2003225.html
- CIDH (2021). *Informe de Admisibilidad. Pueblo garífuna. Honduras*. (Informe No. 197/21. Petición 1364-11.)
- CIDH (2022). *Informe anual 2021. Capítulo IV B Nicaragua*. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/IA2021cap4B.Nicaragua-es.pdf>
- CIVICUS (2019). *Against the Wave: Civil society responses to anti-rights groups, November*, disponible en: <https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/action-against-the-anti-rights-wave/AgainstTheWave-summary-en.pdf>
- CLACSO (2018). *La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina: campesinos, agronegocios y neodesarrollismo*. Libro digital disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180608115610/La_cuestion_agraria.pdf
- Colectivo Darién (2021). *Trafficking as settler colonialism in eastern Panama: Linking the Americas via illicit commerce, clientelism, and land cover change*. World Development, 145, 105490.
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999). *Informe Guatemala, memoria del silencio. Tomo VI Casos Ilustrativos*. Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Ciudad de Guatemala.
- CONADETI (2013). *Informe ejecutivo de la CONADETI y las CIDT's al 30 de junio del año 2013*. Bilwi. Disponible en: https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/costaricibe/pdf/informe_costacaribe3006.pdf
- CONASAN (2016). *Resumen de resultados IV censo nacional de talla I censo nacional de peso en escolares de primer grado de El Salvador*. El Salvador.
- Cordero, Allen (2017). “Bosque, agua y lucha: movimientos ambientalistas en Costa Rica”. En: Almeida, Paul y Cordero, Allen (Eds.). *Movimientos sociales en América Latina. Perspectivas, tendencias y casos*. CLACSO, Buenos Aires.
- Crítica (2022). *Originarios logran su propia mesa de diálogo con el gobierno*. Recuperado de <https://www.critica.com.pa/nacional/originarios-logran-su-propia-mesa-de-dialogo-con-el-gobierno-633278>
- Cuéllar, Nelson; Davis, Andrew; Luna, Fausto; y Díaz, Oscar (2012). *Inversiones y Dinámicas Territoriales en Centroamérica. Implicaciones para la gobernanza y la construcción de alternativas*. PRISMA. San Salvador.
- Cuéllar, Nelson; Kandel, Susan; Davis, Andrew; Díaz, Oscar; Luna, Fausto y Ortiz, Xenia (2012). *Dinámicas Territoriales en Centroamérica: Contexto y desafíos para comunidades rurales*. PRISMA, San Salvador, El Salvador.
- Cuéllar, Nelson; Kandel, Susan; Davis, Andrew y Elizondo, Desiree (2013). *Pueblos indígenas y gobernanza en la preparación para REDD+ en Panamá: Estudio de caso sobre La COONAPIP, la ANAMY el programa de ONU-REDD*. PRISMA. San Salvador.
- Davis, Andrew y Díaz, Oscar (2014). *Adaptación y acumulación: Desafíos, contradicciones e implicaciones para la gobernanza territorial en el corredor seco centroamericano*. PRISMA. San Salvador.
- Davis, Andrew; Hodgdon, Ben; Martí, Manuel y López, Blas (2021). *Financiamiento territorial: Empoderando las comunidades para acción climática*. Disponible en: <https://www.prisma.org.sv/wp-content/uploads/2021/11/Financiamiento-climatico-Informe-PRISMA-2021.pdf>
- Delpino Marimón, Pilar; Humphreys Bebbington, Denise; Bebbington, Anthony; Sauls, Laura; Cuba, Nicholas; Chicchon, Ave-cita; Hecht, Susanna; Rogan, John; Ray, Rebecca; Díaz, Oscar; Kandel, Susan; Osborne, Tracey; Rivera, Madelyn; and Zalles, Viviana (2021). *‘Trad-escapes’ in the forest: framing infrastructure’s relation to territory, commodities, and flows*. Current Opinion in Environmental Sustainability. 53:1-8.
- De Luis Romero, Elena y Rodríguez Carmona, Antonio (2016). *La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala*. Alianza por la Solidaridad. Disponible en: <https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Maq.-Tierra3.pdf>
- El Capital Financiero (2021). *Presentan avances de estudios ambientales y sociales del proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá*. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de ElCapitalFinanciero.com—Noticias Financieras de Panamá website: <https://elcapitalfinanciero.com/?p=143542>
- El Heraldo (2022a). *100 kilómetros de carretera ilegal, la biósfera se cae a pedazos*.
- El Heraldo (2022b). *Tras denuncia de carretera ilegal, gobierno desplazará dos mil militares a resguardar Biósfera del Río Plátano*.
- FAO (2018). *FAO y PMA preocupados por el grave impacto de la sequía entre los más vulnerables de Centroamérica*. Disponible en: https://fao.org/americias/noticias/ver/es/c/1150343_
- Ficek, Rosa Elena (2021). *La carretera de Darién, el Estado panameño y los pastos sin historia (1971-1977)* en Zunino Singh, D.; Gruschetsky, V.; Piglia, M. (Ed.) *Pensar las infraestructuras en Latinoamérica*. Disponible en: <https://www.teseopress.com/pensarlasinfraestructurasenlatinoamerica/chapter/la-carretera-de-darién-el-estado-panameño-y-los-pastos-2/>
- Forbidden Stories (2021). *The Pegasus Project*. Disponible en: <https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/>
- Fradejas, Alberto Alonso; Alonzo, Fernando y Dürr, Jochen (2008). *Caña de azúcar y palma africana: Combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala*. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR), Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP). Mixco, Guatemala.
- FUNDEMUCA (2011). *Autonomía política y gobernanza municipal en Centroamérica y República Dominicana*. Fundación DEMUCA. San José, Costa Rica.

- F-ODM (2010). *Vulnerabilidades y Amenazas Socioeconómicas frente a los Impactos del Cambio Climático en la Cuenca del Río Chucunaque*.
- Gay, Carlos; Estrada, Francisco; Conde, Cecilia; Eakin, Hallie y Villers, Lourdes (2006). *Potential Impacts of Climate Change on Agriculture: A Case of Study of Coffee Production in Veracruz, Mexico*. México, DF, México.
- Girardi, Monseñor Victorino (2009). *Carta Pastoral. Discípulos tras las huellas de Cristo promoviendo la vida en el norte de Costa Rica*. Diócesis de Tilarán-Liberia.
- Global Forest Watch (GFW) (2022). *Nicaragua deforestation rates and statistics*. Disponible en: <https://www.globalforestwatch.org/map/country/NIC?mainMap=eyJzaG9>
- Global Forest Watch (2022a). *Panama deforestation rates and statistics*. Datos recuperados el 21/09/2022 de <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/PAN#:~:text=In%202021%2C%20it%20lost%2024.4,statistics%20about%20forests%20in%20Panama>.
- Global Witness (2017). *Estudio de caso 5: el pueblo Garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras*.
- Global Witness (2020a). *Defending tomorrow*. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/>
- Global Witness, (2020b). *Global Witness exige investigación urgente por la desaparición de miembros de la comunidad Garífuna en Honduras*.
- Graef, Dana J.; Cole, Montina; Covich, Alan P.; Huete-Pérez, Jorge A.; Maxwell, Amanda; Peyton, Jonathan; Stuhl, Andrew y Velásque Runk, Julie (2022). *How Is the World Shaped by Infrastructure Projects That Have Been Cancelled or Stalled?* 41.
- Grepalma (2020). *Agroindustria sostenible de aceite de palma en Guatemala*. Estadísticas Socioeconómicas. Disponible en: <https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2021/05/Ficha-Tecnica-Anuario-Estadistico-2021-VF.pdf>
- Grünberg, Jorge; Grandia, Liza; Milian, Byron y Equipo (2012). *Tierra e igualdad. Desafíos para la administración de tierras en Petén, Guatemala*. Guatemala: Banco Mundial.
- GWP (2014). *Patrones de sequía en Centroamérica Su impacto en la producción de maíz y frijol y uso del Índice Normalizado de Precipitación para los Sistemas de Alerta Temprana*. Disponible en: https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/patrones-de-sequia_fin.pdf
- Hurtado, Laura (2008). *Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala*. ActionAid Guatemala.
- Hurtado Paz y Paz, Margarita y Lungo R., Irene (comps.) (2007). *Aproximaciones al movimiento ambiental en Centroamérica*. FLACSO, Guatemala.
- INEC (2021). *Encuesta Nacional de Hogares, Costa Rica. Medidas porcentuales de pobreza multidimensional de los hogares. Según zona y región de planificación a Julio 2021*. San José, Costa Rica. Disponible en <https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares>
- INEC (2022). *Encuesta Continua de Empleo (ECE), Costa Rica: Costa Rica: Compendio al II trimestre del 2022 sobre los principales indicadores de la población nacional según regiones de planificación*. San José, Costa Rica. Disponible en <https://inec.cr/tematicas/listado?topics=305%252C614&filtertext=regiones%2520de%2520planificaci%25C3%25B3n>
- InSight Crime (2013). *Aumento de la Violencia en el Norte de Nicaragua 'Vinculado al Crimen Organizado'*.
- InSight Crime (2014). *El tráfico ilegal de madera de Nicaragua devasta la reserva forestal más grande de Centroamérica*.
- InSight Crime (2021a). *Perfil de Honduras*
- InSight Crime (2021b). *La controvertida 'narco-carretera' de la Mosquitia, Honduras*.
- InSight Crime, (2022). *Las entrañas del contrabando de ganado de Centroamérica hacia México*.
- IOM (2022). *Number of Venezuelans Crossing the Darien Gap Soars*. Disponible en: <https://panama.iom.int/en/news/number-venezuelans-crossing-darien-gap-soars>
- IOM The Storyteller (2022). *El Darién, una brecha entre la esperanza y la desesperación*. Disponible en: <https://panama.iom.int/es/stories/el-darien-una-brecha-entre-la-esperanza-y-la-desesperacion>
- Kreimann, Rosibel (2010). *Extracción de madera caída posterior al Huracán Félix: una sistematización de dos experiencias en la RAAN*. Cuaderno de Investigación Nitlapan. Managua.
- Larsson, Anne y Soto, F. (2012). *Territorialidad y gobernanza. Tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua*. Managua.
- Los Angeles Times (2022). *Honduras suspende plan de crear zonas económicas especiales*. Disponible en: <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-04-30/honduras-suspende-plan-de-crear-zonas-economicas-especiales>
- MacNeill, Tim (2017). *Development as Imperialism: Power and the Perpetuation of Poverty in Afro-Indigenous Communities of Coastal Honduras*. *Humanity & Society*, 41(2), 209–239. <https://doi.org/10.1177/0160597615603748>
- MAG (2020). *Región de Desarrollo Chorotega. Programación Región de Desarrollo Chorotega 2020*. Liberia.
- MAGA (2006). *Mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra a escala 1:50,000 de la República de Guatemala*, Año 2003. Guatemala.
- McSweeney, Kendra; Richani, Nazih; Pearson, Zoe, Devine, Jennifer y Wrathall, David J. (2017). *Why Do Narcos Invest in Rural Land?* *Journal of Latin American Geography*, 16(2).
- MARN (2012). *Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP): Esfuerzo principal de adaptación al cambio climático en El Salvador*. San Salvador.
- Martí i Puig, Salvador (2022). *Urgencias en la América Central del Bicentenario*. En: Revista Nueva Sociedad, No. 300, Buenos Aires.
- Martínez Mauri, Mónica (2010). *El tesoro de Kuna Yala. Turismo, inversiones extranjeras y neocolonialismo en Panamá*. *Cahiers des Amériques latines* 65 | 2010, 73-88.

- Martínez Mauri, Mónica (2020). *La autonomía indígena en tiempos de pandemia. Panamá, la comarca de Gunayala y la COVID-19*. Revista Catalana de Dret Ambiental, 11(2). <https://doi.org/10.17345/rcda2946>
- Mateo-Vega, Javier; Arroyo-Mora, Pablo y Catherine Potvin (2019). *Tree aboveground biomass and species richness of the mature tropical forests of Darien, Panama, and their role in global climate change mitigation and biodiversity conservation*. Conservation Science and Practice, 1(8), e42. <https://doi.org/10.1111/csp2.42>
- MFEWS (2015). *Zonas de Medios de Vida y Descripciones* Disponible en: <http://fews.net/central-america-and-caribbean/honduras>
- MIDEPLAN (2018). *Informe de Seguimiento de Metas Anuales 2018 y de cierre de período 2015-2018*. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
- MINAE (2021). *Programación de Región de Desarrollo Chorotega 2020*. Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.
- Mongabay (2020). *Palma africana amenaza con desaparecer pueblo Garífuna en Honduras*. Series de Mongabay: Cercados por la palma, Especiales transnacionales.
- Mongabay (2021a). *Honduras: narcotráfico y ganadería disparan deforestación en la Reserva de Biosfera de Río Plátano*.
- Mongabay (2021b). *Honduras: carretera ilegal para ganado y droga pone en peligro Reserva de la Biosfera del Río Plátano*
- Munck, Ronaldo (2021). *Los movimientos sociales en America Latina. Cartografiando el mosaico*, traducción Pascual Garcia-Macias, A Desalumar Ediciones Montevideo Uruguay, La Libre la presente edición. ISBN: 978-9917-9833-7-8. Ag. 2021
- Morales Aguilar, Natalia (2018). *Guanacaste más urbano y educado aspira a más empleo e inversión*. Disponible en <https://estadonacion.or.cr/un-guanacaste-mas-urbano-y-educado-aspira-a-mas-empleo-e-inversion/>
- Neveche, Claire (2022). *Las cinco crisis de Panamá*. En: The Conversation, 20 de julio, <https://theconversation.com/las-cinco-crisis-de-panama-187398>
- OECD (2022). *Nicaragua*. Disponible en: <https://oec.world/en/profile/country/nic/> (accedido septiembre 2, 2022).
- ONU. (2022). *Viruela del mono, paro nacional en Panamá, COVID-19...* Las noticias del jueves. Noticias ONU. <https://news.un.org/es/story/2022/07/1511962>
- OPS (2020). *Respuesta a los huracanes Eta e Iota*. En: <https://www.paho.org/es/respuesta-huracanes-eta-iota>.
- OPS (2022). *Reporte de Situación COVID-19*. Panamá. 34.
- Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) (2013). *Vallecito, la nueva invasión y el supuesto «heredero»*. Honduras.
- Oxfam (2016). *Garifunagu Ágüdahei Hamua Garífunas en defensa de sus territorios. Defensoras de la Madre Tierra*.
- Pearce, Jenny (2018). *Elites and Violence in Latin America. Logics of the Fragmented Security State*. Violence, Security, and Peace Working Papers, No.1. Latin America and Caribbean Centre, London School of Economics and Political Science, UK.
- Porras Acevedo, Stephanie (2018). *Desarrollo territorial de Guanacaste desde el enfoque de sistemas territoriales de producción agroalimentaria*. Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible. Vol. 3 (1) • Enero- junio, 2018: 44-63
- PRISMA (2010). *Dinámicas territoriales en Rivas y Guanacaste: contexto, desafíos y oportunidades desde los sectores locales. Memoria de diálogo territorial, San Juan del Sur*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2014). *Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales Defendiendo Derechos Territoriales*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2015). *Gobernanza basada en derechos: experiencia de autoridades territoriales en Mesoamérica*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2017). *Muskitia hondureña. Diagnóstico sobre Gobernanza Territorial*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2019a). *Cultivos agroindustriales: Temas críticos para la gobernanza territorial en Centroamérica*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2019b). *Megaproyectos. Temas críticos para la gobernanza territorial en Centroamérica*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2019c). *Actores y actividades ilícitas. Temas críticos para la gobernanza territorial en Centroamérica*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2019d). *Cambio climático. Temas críticos para la gobernanza territorial en Centroamérica*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2019e). *Movimientos sociales. Temas críticos para la gobernanza territorial en Centroamérica*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2019f). *Dinámicas territoriales en el departamento de Ahuachapán, El Salvador*. Fundación PRISMA. San Salvador, El Salvador.
- PRISMA (2020a). *COVID 19: Respuestas de actores y escenarios para la gobernanza territorial*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2020b). *Voces desde los territorios*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2021). *Actores de la agenda climática en el Triángulo Norte de Centroamérica: Hacia un fortalecimiento del rol de la sociedad civil*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2021a). *Mapeo de actores de Cambio Climático: La Muskitia hondureña*. Fundación PRISMA. San Salvador.
- PRISMA (2021b). *Experiencias rurales por el derecho humano al agua en búsqueda de una buena gobernanza*. Fundación PRISMA. San Salvador, El Salvador.
- PRISMA (2022). *Las comunidades colindantes al Parque Nacional El Imposible, El Salvador*. Fundación PRISMA. San Salvador, El Salvador.
- Programa Estado de la Nación (2000), *Informe Estado de la Nación; 6 – 2000*, PEN: San José, Costa Rica.

- Programa Estado de la Nación (2017). *Informe Estado de la Nación: 23 – 2017*, PEN: San José, Costa Rica.
- Programa Estado de la Nación (2015). *Capítulo 6 Desafíos de la región Chorotega*. Costa Rica
- PRONicaragua (2022) *Agronegocios*. Disponible en: <https://pronicaragua.gob.ni/es/agronegocios>
- Quiles Sendra, Jordi (2019). *Defendemos la vida. Las luchas sociales en Alta Verapaz*. PBI Guatemala.
- Robinson, William I. (2011). *Conflictos transnacionales: Centroamérica, cambio social y globalización*. UCA Editores: San Salvador, El Salvador.
- Román, Marcela (2012). *Dinámicas territoriales en Rivas y Guanacaste, turismo y desarrollo inmobiliario, tendencias y desafíos*. San Salvador. PRISMA.
- Romero, Ana (2011). *Prevalencia de Enfermedades No Transmisibles en la población adulta de 18 a 59 años de edad del municipio de Ahuachapán, en los años 2009, 2010 y 2011*. Ahuachapán, Ahuachapán, El Salvador.
- Ros-García, Juan Manuel; Irastorza-Ruigómez, Luis y González-Lezcano, Roberto Alonso (2020). *Previsiones del impacto sobre cambio climático. Archipiélago de San Blas (Panamá)*. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales. <https://doi.org/10.37230/Cy-TET.2020.205.09>
- Sáenz de Tejada, Ricardo (2022). *Guatemala: ¿del Estado capturado al Estado plurinacional?* En: Revista Nueva Sociedad, No. 300, Buenos Aires.
- Sanabria Soto, Silleny (2022). *Proyecto de agua para Guanacaste urge de un plan de desarrollo estructurado para diversos sectores de la provincia*. Disponible en <https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/8759-proyecto-de-agua-para-guanacaste-urge-de-un-plan-de-desarrollo-estructurado-e-integrado-a-mercados-seguros-para-los-diversos-sectores-productivos-de-la-provincia>
- Sauls, Laura Eileen y Rosa, Herman (2019). *Evaluación y alcance de la industria extractiva y la infraestructura en relación con la deforestación en América Central*.
- Sauls, Laura Eileen; Dest, Anthony; McSweeney, Kendra (2022). *Challenging conventional wisdom on illicit economies and rural development in Latin America*. World Development 158.
- SEGEPLAN (2002). *Caracterización del departamento de Alta Verapaz*. Guatemala.
- SEGEPLAN (2003). *Estrategia de Reducción de la Pobreza Departamental*, Secretaría de Planificación y Programación. Guatemala.
- Segovia, Alexander (2022). “*Centroamérica en su laberinto: reflexiones sobre la naturaleza de la crisis y criterios para abordarla*”. Documentos de Trabajo no. 72 (2a época), Madrid, Fundación Carolina.
- Silva Lucas, Arturo (2022) *Guanacaste: diálogos con las candidaturas legislativas 2022-2026*. Disponible en <https://www.albasud.org/blog/es/1421/guanacaste-dialogos-con-las-candidaturas-legislativas-2022-2026>
- Solano, Luis (2007). *La Franja Transversal del Norte: Neocolonización en marcha*. El Observador. Análisis alternativo sobre política y economía. Año 2, No. 7. Guatemala.
- Solano, Luis (2012). *Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN)*. Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG.
- Sosa Velásquez, Mario (2016). “*Acción pública y desarrollo territorial en Alta Verapaz: eufemismos con el modelo económico y el Estado actual*”. ISE-Universidad Rafael Landívar. Guatemala.
- Tapia, Salvador (2018). “*Estudio y análisis de la cadena de valor del cacao en cuatro países de Centroamérica*”. Proyecto “Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica” (Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala), VECO Mesoamérica.
- Tellman, Beth; McSweeney, Kendra; Manak, Leah, Devine, Jennifer, Sesnie, Steven, Nielsen, Erik y Dávila, Anayansi (2021). *Narcotráfico y control de la tierra en Guatemala y Honduras*.
- Testa, Marlene (2022). *Eduardo A. Burgos: «Siempre he soñado con una carretera interamericana que se extienda y se abra por el Tapón de Darién»*. La Estrella de Panamá. Recuperado de <https://www.laestrella.com.pa/nacional/220203/eduardo-burgos-siempre-he-sonado>
- The Oakland Institute (2020). *Nicaragua: una revolución fallida. La lucha indígena por el saneamiento*. Disponible en: <https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento>
- UNICEF (2022) *Panamá CO: Reporte de Situación - Deterioro de situación de migrantes en el marco del Paro Nacional*. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/panama/panama-co-reporte-de-situacion-deterioro-de-situacion-de-migrantes-en-el-marco-del-paro-nacional-20-de-julio-de-2022>
- Unidad Técnica del Proyecto Panamá – Darién (1978) *Proyecto de Desarrollo Integrado de la Región Oriental de Panamá – Darién*. OAS.
- van Noorlos, Femke (2013). *El turismo residencial: ¿Acaparamiento de tierras? Un proceso fragmentado de cambio socioespacial, desplazamiento y exclusión*. Opiniones en desarrollo. Programa Turismo Responsable Artículo núm. 16. Albasud.
- Vanderman, Ella y Velásquez Runk, Julie (2020). *Panama’s illegal rosewood logging boom from Dalbergia retusa*. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01098>
- Vargas Araya, Ronal (2013). *Una mirada socioeconómica de Guanacaste y su gente*. Documentos para el debate, Turismo Responsable. Albasud.
- WCS (s.f.) *Los 5 Grandes Bosques de Mesoamérica. El Darién*. Consultado el 21/09/2022 de <https://programs.wcs.org/gcf-the5greatforests/es-es/Los-5-Grandes-Bosques-de-Mesoamerica%20El-Dari%C3%A9n>.



REVALORIZANDO COMUNIDADES Y TERRITORIOS

 prisma.org.sv

 @PrismaRegional

 @prisma_org